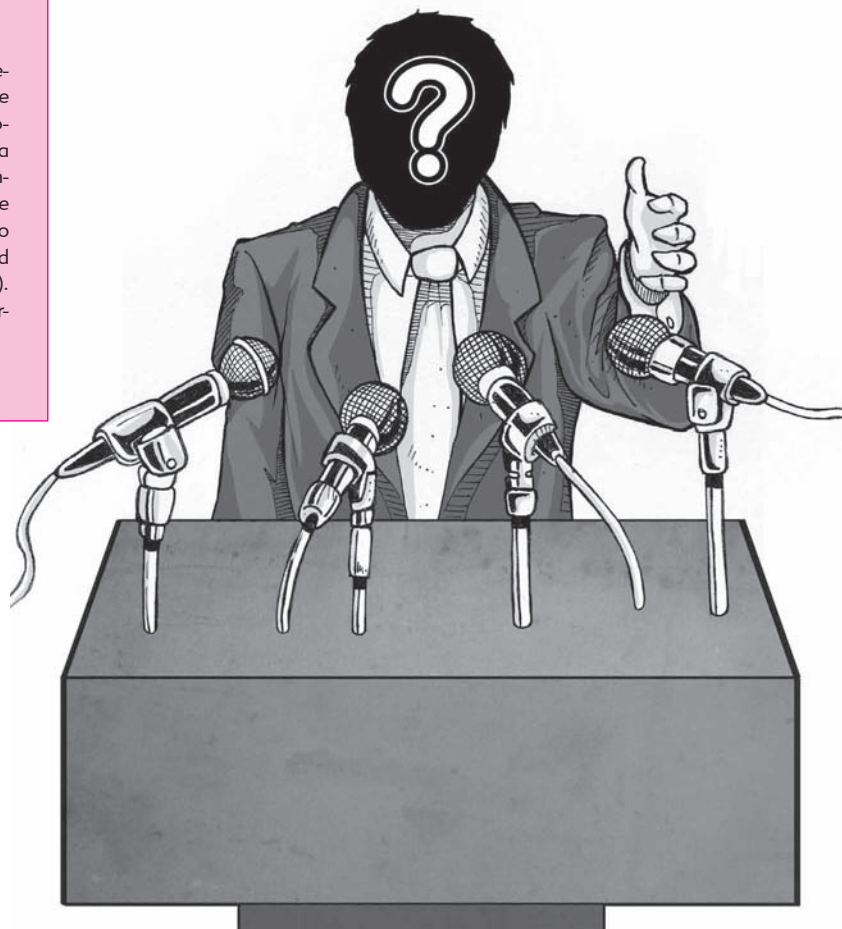


Los medios de comunicación y los enmarcamientos clasistas de la protesta social. El caso argentino

MARCELO GÓMEZ

Licenciado en Sociología de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires Máster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO. Candidato a Doctor en el Programa de Doctorado del Instituto de Desarrollo Económico y Social y la Universidad de General Sarmiento (IDES/UNGS). Docente de tiempo completo Universidad de Quilmes, Buenos Aires.
mgomez@unq.edu.ar



RESUMEN

Este artículo se propone plantear el caso argentino como un punto de partida, rico en matices y contradicciones, para analizar las formas de constitución de la ciudadanía en los medios de comunicación y en los movimientos sociales contestatarios, y cómo ambas fuentes de ciudadanización se articulan y tensan entre sí. ¿Cómo se definen y cuáles son las figuras de la ciudadanía en la era del neoliberalismo y su crisis?, ¿Quiénes son las voces autorizadas para participar o decidir quién participa en la esfera pública, qué voces son privilegiadas o priorizadas, cuáles son las formas de valoración y presentación de la participación?

Palabras clave: enmarcamientos clasistas, medios de comunicación, movimientos sociales.

ABSTRACT

This paper presents the Argentinian case as a starting point, rich in tones and contradictions, to analyze the forms through which citizens are derived within the communication media and the deliberative social movements, as well as the interrelationship among them. How do they define themselves?, Who are the main characters in the crisis of the neoliberalism era?, Who are the authorized voices that participate and decide within the public realm? Which are the privileged voices? Which are the forms to value and present in the participation process?

Key words: communication media, deliberative social movements.

INTRODUCCIÓN

Recientemente, Rosanvallon (2007) ha realizado un considerable esfuerzo analítico de comprensión de una serie de fenómenos que se han extendido en las democracias contemporáneas. Desde diversas denominaciones como “contrapolítica”, “política indirecta”, “contrapoderes ciudadanos”, “democracia civil” y otros, se señala una suerte de desinstitucionalización de la democracia política y una opción preferencial por formas de participación en la acción directa y la autoorganización colectiva. Los movimientos sociales y el recurso a las acciones colectivas contenciosas son caracterizados como una forma de “organización de la desconfianza hacia el poder” (Rosanvallon, 2007, 24) incluso hacia el poder democrático.

Esta desconfianza ha estado presente desde el nacimiento mismo de la ciudadanía moderna como ideal iluminista del autogobierno en el que se alberga una dualidad de tradiciones, una tensión irresuelta. En efecto, las grandes revoluciones de los Siglos XVII en Inglaterra, y XVIII en América del Norte y Francia, ya delatan los dilemas que enfrenta la tarea de forjar la autonomía humana. En una tradición jacobina centrada en la noción de pueblo, la libertad individual sólo puede realizarse en un orden colectivo. Para la tradición liberal, el orden colectivo puede darse, únicamente, merced las libertades individuales. En ambos casos, los grandes debates constitucionales y las luchas políticas revolucionarias muestran la problemática de la ciudadanía inscrita en lo que Rosanvallon llama las “reservas de desconfianza” hacia el poder, que parece inherente al principio democrático mismo. Los liberales temen que las libertades y la autonomía individual sean menoscabadas por los excesos del poder colectivo tanto en la forma estatal organizada como en la tumultuosa forma del pueblo, o en sus figuras más visibles: el proletariado. Por su parte, la ancha tradición jacobina teme al abstracto igualitarismo de la libreconciencia autodeterminada detrás de la que se esconden formas bien concretas de dominación y opresión. En una tradición, la ciudadanía son los derechos de los individuos ante los poderes colectivos, y la soberanía fundamental a ser preservada es la de los sujetos, y en la otra, la ciudadanía es la forma de intervención en la construcción colectiva de un destino común, y la soberanía fundamental a ser preservada es la del pueblo.

El devenir histórico de las democracias europeas quiso que ambos principios se juntasen de la mano de las luchas de las clases populares por

su reconocimiento social y político: la democracia electoral se convirtió en social y los poderes colectivos (fundamentalmente sindicales) fueron encontrando un *modus vivendi* con los procedimientos electorales, la división de poderes, y los derechos individuales.

La contradicción entre individuo único depositario de voluntad libre y grupo-clase-nación como voluntad colectiva que preexiste a la decisión individual, es una clave fundante de la vida y los conflictos políticos de las sociedades con sistemas democráticos.

Esta tensión irresuelta es constitutiva de la llamada esfera pública democrática y, según Rosanvallon, tanto los medios masivos de comunicación como los movimientos sociales, tienen un papel preponderante en la construcción de la ciudadanía actual, en la medida en que ambos son tanto “organizadores” como gestores de las reservas de desconfianza.

LOS PROCESOS ENMARCADORES DE LA CIUDADANÍA

Los medios de comunicación han ganado un enorme terreno en la producción, distribución y consumo de mensajes en torno a estas preguntas. La “mediatización” de la actividad política y de la ciudadanía es casi un lugar común de la literatura sociopolítica de nuestra época (el “homo videns”, “la videopolítica”, etc.). Rosanvallon coloca a los medios en el mismo paquete que los movimientos sociales, como instancias no institucionalizadas de una democracia de la desconfianza y el control donde pugnan varios actores: grupos militantes, periodistas, opositores, redes virtuales, público interconectado a través de internet, etc. (op. cit. 76 y ss). Efectivamente, la forma de la acción colectiva contestataria asume un creciente carácter performativo y su espectacularidad casa de manera natural con las exigencias de los medios de comunicación.

Los aportes de la teoría de los procesos enmarcadores

La llamada teoría del enmarcado interpretativo basada en el concepto de *framing* (Goffman, 1974) ha sido desarrollada para estudiar las estrategias comunicativas tanto de los movimientos sociales como de los medios. Medios y movimientos sociales comparten el hecho de ser productores o fuentes de procesos cognitivos, proporcionadores de marcos de percepción y comprensión de acontecimientos y situaciones sociales. La acción colectiva es un portador de potentes claves decodificadoras de conflictos, injusticias o necesidades insatisfechas y aspiracio-

nes frustradas. A través de la movilización contestataria, las audiencias toman conciencia de problemas o definen posiciones en conflictos¹.

Veamos algunos aspectos de la teoría de los marcos interpretativos como base conceptual para el análisis.

Una de las funciones elementales de cualquier intento enmarcador es la de atribución (Hunt y ot., 2006). Medios y movimientos pugnan por la construcción de sentidos y disputan sobre la atribución de rasgos e identidades a los protagonistas de cualquier acontecimiento. Las formas de autopresentación, el manejo del self colectivo, del nosotros y de los otros, antagonistas y público, junto con las interpelaciones y definiciones que asignan sentido a la acción colectiva, son elementos fundamentales de la lucha en la que los movimientos entran en complejas relaciones de competencia, articulación y a veces de conflicto con los medios de comunicación.

Desde la visión de la teoría del enmarcado interpretativo, la “mediatización” significa que el medio no vende sólo espectáculo para atraer audiencias, sino vende visión o esquemas de elaboración de sentido acerca del espectáculo que está vendiendo. Los estudios suelen señalar dos factores causales importantes que inciden en la conformación de las claves “mediatizadoras”:

- a. El imperativo de “lo noticiable”, es decir, la necesidad de satisfacer el objetivo de atraer el interés y la atención del público. En este punto, es fundamental el recurso a los “guiños” a la cultura (Martín-Barbero, 2000), a los sistemas de creencias ya instalados y a las experiencias compartidas por las audiencias. Sólo teniendo en cuenta lo que se denomina “fidelidad narrativa” (Snow y Benford, 2006; Amparán, 2006) a la cultura y los sistemas de significados arraigados en una época, se puede atraer la atención masiva del público.
- b. Los intereses articulados a las propias empresas de comunicación, donde las principales fuentes de financiamiento, en muchos casos estatales o políticas, su articulación con otras actividades económicas, procesos de concentración y cartelización empresarial, juegan un papel fundamental a la hora de definir filtros

.....
¹. Los movimientos sociales son entendidos como “agencias de significación” o usinas cognitivas a través de las cuales el conjunto asume problemas. Ingresan a la esfera pública donde ya están instalados los mass media y el Estado, desarrollando una “política de la significación” (Stuart Hall, 1982) para cohesionar movilizadas, ganar apoyos y simpatías, desmovilizar y neutralizar oponentes, y luchar por condiciones que favorezcan el trabajo de producción de sentido.

en la selección de asuntos noticiables y, sobre todo, de imprimir sesgos en el tratamiento noticioso buscando generar aceptación o rechazo conforme a estos intereses. Demás está decir el peso político y económico específico que tienen algunas empresas (y empresarios) concentradoras cuasimonopólicas de medios masivos (Mastrini y Becerra, 2007).

En general, los estudios de la relación *mass media*/movimientos parten del planteo básico de una suerte de trueque de visibilidad/repercusión a cambio de espectacularidad y atención pública. En realidad, la capacidad de moldeamiento que ostentan los medios sobre los mensajes, la imagen y las enunciaciones públicas de los movimientos, obliga a analizar relaciones que van desde la complementariedad hasta la colisión.

Está suficientemente establecido que los medios llevan a cabo operaciones de moldeamiento, de enmarcado del discurso, los actores y las acciones, asignándoles atributos de manera simplificada, estereotipada y, muchas veces, estigmatizante (Bourdieu, 1980). Los estudios, en general, confirman que la eficacia persuasiva de los enmarcados mediáticos aumenta cuando la distancia social de la experiencia cotidiana del público respecto de los temas es muy amplia, y cuando el conocimiento directo de las audiencias sobre el evento o tema abordado es muy bajo. En estos casos, el medio produce su efecto de veracidad cuando es capaz de estimular al público a utilizar un marco interpretativo ya disponible y arraigado en las audiencias para interpretar otro tipo de eventos o temas (Mc Leod y Datenber, 1999). Los medios ofrecen la posibilidad de interpretar “lo que pasa” en un fenómeno del que el público no tiene una vivencia directa o conocimientos propios, utilizando metáforas específicas como detonante para aplicar marcos interpretativos con los que el público suele interpretar otros fenómenos o situaciones más cercanas a su experiencia o a su conocimiento directo. Se dan entonces las condiciones óptimas para la simplificación, la homogeneización esquemática, la generalización indiscriminada y el estereotipo al que recurren los medios como estrategia persuasiva.

La forma estándar de enmarcamiento mediático de las acciones de movimientos contestatarios y protestas, es la de poner en primer plano las acciones espectaculares, opacando u omitiendo las realizaciones sociales, culturales, organizativas que hacen posible esas acciones. Melucci (1994) había advertido sobre este fenómeno: los medios desnaturalizan los procesos identitarios mediante el expediente de la simplificación y la

unilateralidad de la imagen de la acción. En el lenguaje audiovisual, los movimientos *son* la protesta callejera. Los acontecimientos de la lucha, los disturbios, la represión, desplazan los motivos, las demandas y los valores e identidades de los participantes. Los medios brindan repercusión a costa de ocultar, dejar sumergidas las raíces identitarias y su producción cultural. La lógica de la cobertura mediática tiende de forma general a resaltar las capacidades de acción y a menoscabar identidades, valores y logros de autoorganización y mejora de los grupos movilizados.

Por ello, es esencial a los movimientos combatir el enmarcado mediático de sus acciones mediante algunos recursos: a. El volcado en la acción misma, en los repertorios de protesta, de la carga simbólica y cultural de la que son portadores, intentando reducir los márgenes de libertad de reenmarcado o manipulación mediática de las protestas; b. evitando facilitar la estigmatización descartando o moderando el uso de formas de acción violentas o abusivas para terceros; c. el aprovechamiento de las tic para construir canales propios y más controlados de comunicación.

Las tendencias a la estetización y a la dramatización de las protestas, la imposición del canon de la “resistencia pacífica” y del uso intensivo de la web, intentan sortear los escollos y las trampas de la mediatización, además de aumentar la espectacularidad de las acciones. Sin embargo, el poder de resignificación que ostentan las industrias periodísticas y de la comunicación de masas, puede hacer que las imágenes sean “editadas” en clave de disturbio, y que los mensajes y la información puesta a circular por la web, sean retomados por los grandes medios para recircularlos bajo nuevos marcos de interpretación.



Algunas claves del enmarcamiento mediático de la ciudadanía

Un aspecto central en el enmarcado de identidades, por parte de los medios de comunicación de masas, es el de atribución o negación de atribución de “agentividad”, es decir, la construcción de una imagen o de claves de percepción de ciertos grupos o perfiles sociales como legítimos y libres enunciadores de significado sobre el orden colectivo, productores de sentido dueños de una voluntad autodeterminada o, por el contrario, privados de la posibilidad de enunciación libre, padeciendo de diversos defectos de capacidad o vicios de la voluntad. Desde la atribución de patologías hasta la misma “inocencia”, pueden significar un enmarcado que destituye como sujeto-agente a un enunciador.

La atribución de responsabilidad, voluntad propia, capacidad social de los agentes (Klander-

mans y Goslinga, 1999) y los procesos de *wording* o nominación, son complejos pero centrales para la problemática de los movimientos en su relación con los medios. Así, una máxima del enmarcado mediático es que las clases populares son enunciadas en marcos que las interpretan como objetos pasivos dentro de un orden y nunca como sujetos activos capaces de cambiar o intentar cambiar el orden².

La esfera pública de deliberación sobre principios centrales de la organización social, sobre los proyectos societales, sobre las preferencias generales acerca del bien común y los asuntos públicos, es enmarcada por los medios en un registro clasista discriminador de los sectores populares. Las cuestiones del bien común, las orientaciones o decisiones importantes sobre la organización social, no son esferas discursivas habilitadas a las clases populares y sus voceros o líderes.

 **Está suficientemente establecido que los medios llevan a cabo operaciones de moldeamiento, de enmarcado del discurso, los actores y las acciones, asignándoles atributos de manera simplificada, estereotipada y, muchas veces, estigmatizante** 

El enmarcamiento de las acciones y discursos de las clases populares los proscriben como sujeto político de enunciación y acción constructora de un orden común. Las tácticas discursivas que operan esta exclusión de la agentividad son muy variados tanto en términos de nominación como de narración de acciones.

- a. Es clásica la disociación entre sujeto-epistémico (deseos, preferencias) y sujeto-agentivo (productor de hechos, actor) (Schiffrin, 1996). Las clases populares o los eventos que generan, son enmarcados como carentes de fundamento epistémico o, al revés, las enunciaciones del sujeto epistémico son ensoñaciones románticas destinadas a frustrarse por incapacidad, debilidad o imposibilidad para actuar en consecuencia.
- b. A su vez, el sujeto epistémico puede ser tratado como una figura falsa o desdoblada: “la voz” que se escucha no es verdadera-

.....
² El viejo concepto de Marx de clase para sí, alude justamente a esta cuestión de la lucha por el reconocimiento del agenciamiento social de las clases subalternas: procurarse una identidad que alimente el imaginario de centralidad histórica al punto de autopropone un papel político decisivo.

mente la del enunciador popular, hay otros “autores” o “principales” del discurso por detrás³. Los deseos, preferencias y voluntad enunciados por las clases populares nunca “son” de las clases populares, siempre son formas vicarias de otros verdaderos sujetos epistémicos (agitadores, caciques, conspiradores, etc.). Este enmarcado supone implícitamente la imposibilidad de la voluntad popular genuina y la denuncia de todas sus posturas.

- c. Otra disyunción utilizada, esta vez sobre el sujeto-agentivo, es la del eje solidaridad/mutualidad versus el eje autorresponsabilidad/competencia/capacidad mediante los que se utiliza un código binario para separar aquellos que pueden valerse por sí mismos y aquellos que no pueden hacerlo y necesitan de otros (Klandermans y Goslinga, 1999). Según esta clave enmarcadora, las clases populares no son capaces de autonomía en la acción para resolver sus problemas y enfrentar dificultades. Suelen ser presentadas como demandantes de solidaridad o ayuda, justamente en tanto que no pueden “arreglarse solas” o autovalerse por sí. En este género se ubican todas las explicaciones de las conquistas populares no por las capacidades de las masas sino por su instrumentación por parte de líderes, otros grupos, organizaciones exógenas, etc. El típico discurso mediático de enmarcar las grandes luchas de las clases subalternas por la búsqueda de líderes o patrocinadores encubiertos (“¿quién está detrás de todo esto?”), intereses “ocultos”, organizaciones “en las sombras”, apunta en el mismo sentido.
- d. De acuerdo con un esquema propuesto recientemente (Mata, 2006), el marco de interpretación puesto en juego por los medios para enmarcar atributivamente a los protagonistas de eventos de protesta comprende una gradación de tres escalones en cuanto a la responsabilidad y capacidades crecientes de incidencia sobre el orden social: sujetos de necesidad, sujetos de derecho y sujetos de decisión. En los primeros, se los reconoce como meros carentes o padecedores, damnificados, víctimas, que en su vulnerabilidad también pueden ser manipulados o utilizados. Los *sujetos de necesidad* son inscritos en el eje de solidaridad o mutualidad y en el mismo acto son desresponsabilizados. La simplificación los condena a meros receptores de la solidaridad colectiva o de la

eficiencia del Estado para responder a sus necesidades. Muchas veces, esas mismas necesidades son formuladas mediante otros agentes legítimos porque ellos ni siquiera son tomados como capaces para formularlas.

Los *sujetos de derecho* son enunciados como víctimas de una injusticia o portadores de intereses propios reconocidos como legítimos y se les concede capacidad de acción en tanto dejen en manos del orden la respuesta a sus demandas, sin legitimidad para expresar epistémicamente preferencias de orden distintas y sin capacidad de hacerse cargo de impulsar o, eventualmente, dirigir o comandar el orden social. Limitados a la queja, son posicionados como beneficiarios de los mecanismos de corrección del orden dado. Por último, los *sujetos de decisión*, en cambio, son representados como rectas conciencias autorresponsables, autosuficientes, no condicionados por necesidades ni injusticias, siendo legitimados para expresar sus preferencias sobre el orden colectivo y el bien general, y también para atribuirles capacidad y responsabilidad para tomar las decisiones en lugar de sus representados o de otros grupos inhábiles.

EL ENMARCAMIENTO DE LA POLÍTICA EN LOS MEDIOS BAJO EL NEOLIBERALISMO: LA CIUDADANÍA DÉBIL

La historia reciente argentina ofrece múltiples fenómenos de luchas sociales y de variados ejemplos de procesos de enmarcamiento y contraenmarcamiento de la movilización social. El protagonismo de los medios y de la protesta de la mano de una crisis política institucional mayúscula, ha llevado la *contrademocracia* a su forma paroxística, que fue hecha hipóbole en la consigna que inspiró a muchos movimientos: ¡Que se vayan todos! Por ello, el caso argentino es rico en contrastes y amerita el intento de aproximarnos a los macroprocesos enmarcadores, sus claves clasistas y su tratamiento acerca de la ciudadanía, durante el periodo que va desde los cambios introducidos por el modelo neoliberal, hasta su crisis y la posterior emergencia de una recomposición de la política, donde los movimientos sociales contestatarios y la apelación a la acción colectiva disruptiva (Tarrow, 1997) cumplen un papel central.

No obstante, es conveniente partir de la consideración de los cambios en los enmarcamientos mediáticos de los cambios sociales y políticos acaecidos en la década de los 90 bajo la hegemonía ideológica del neoliberalismo.

³. Ver la clásica distinción de Goffman (1981).

Los medios y la ciudadanía débil

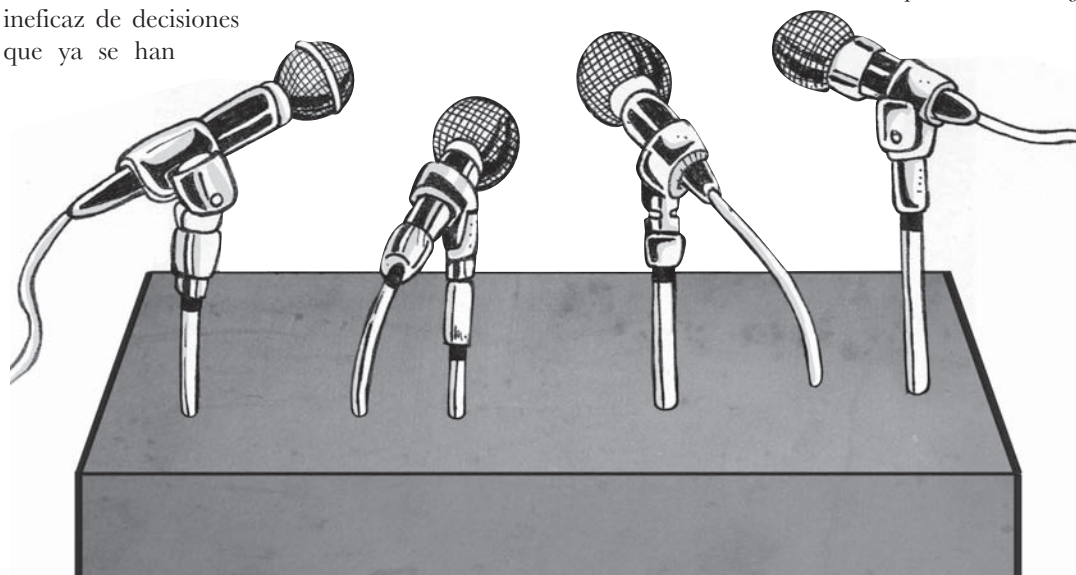
La tematización de la ciudadanía débil y las formas del retraimiento y la desafectación de la política que han inundado los estudios del neoliberalismo latinoamericano y sus costos en términos de vida democrática, no pueden interpretarse sin el exitoso enmarcamiento interpretativo de las reformas estructurales de los 90, en dos tópicos o aspectos importantes para redefinir la ciudadanía: a. La “inexpugnabilidad” política de los mecanismos de mercado, es decir, la imposibilidad e indecibilidad consagrada de la intervención política sobre las cuestiones de acumulación económica, con el subrayado de valoraciones de eficiencia y racionalidad, además de la percepción de la “impotencia” estatal frente a mercados globalizados cuyos decisores son distantes, anónimos, extraterritoriales, fuera del alcance de los sistemas políticos; y b. la descolectivización de la política: las pugnas de intereses no podían resolverse mediante la acción colectiva sino mediante una delegación en quienes detentan la legitimidad electoral. La única forma de disenso deseable es la que se expresa individualmente a través del acto electoral. Doble exclusión y autolimitación del poder político: el estado no debe meterse en la economía y los intereses particulares, las demandas sociales –excepto las de “los mercados”– no deben meterse en la actividad gubernamental. La forma del interés general es el mercado como síntesis de la competencia legítima entre particulares, y el estado democrático como monopolio sancionado electoralmente de la administración de los asuntos residuales que no se haga cargo el mercado. El “lazo político” (Svampa, 2005) queda fuera de las mediaciones sociales (organizaciones, sindicatos, movimientos) y se circunscribe a *los mass media* y a la opinión pública girando exclusivamente en torno al problema electoral.

Unas elites completamente sumergidas en el discurso de la globalización y la religión de los mercados, convierten el poder político en un administrador secundario e ineficaz de decisiones que ya se han

tomado en instancias sustraídas al “lazo político”, a la deliberación y a la decisión de los representados, devenidos “espectadores” de sus propias tragedias. Las demandas e intereses de las masas aparecen excluidas de la consideración política, sujetas a una administración especializada de quienes detentan el saber y el trato con los mercados (la tecnocracia), y los partidos políticos desdibujan sus vínculos con los intereses y demandas de la mayor parte de su propio electorado.

Los medios de comunicación, el periodismo en general, alinearon sus marcos interpretativos para hacerlos “consonantes” con esta nueva forma de la política neoliberal. Así, fueron promotores de una ciudadanía despolitizada y descolectivizada. Por un lado, legitimando un discurso de apología de los mercados como principio de organización social y como forma privilegiada de resolución de las pugnas de intereses particulares. Por otro lado, maximizando el efecto delegador: los gobernantes y la clase política eran presentados en los medios enmarcándolos predominantemente fuera de sus responsabilidades políticas, es decir, recontextualizando la imagen pública a través de la exposición de los políticos en formatos de entretenimiento. La banalización mediática de la política intenta sustraer distraídamente al espectador de la consideración de las decisiones sobre asuntos públicos. La administración, las decisiones y políticas concretas no están sujetas al escrutinio o la crítica, sino que sólo son los administradores y decisores los que deben ser expuestos a la consideración de las audiencias. Las cuestiones políticas son recluidas a programas de cable con escasísimo rating y las principales figuras políticas se abocan a conquistar la “confianza” de los telespectadores a costa de desinvertirse políticamente.

La exposición al ridículo de los líderes políticos fue en los años 90 un recurso televisivo novedoso muy utilizado que se orienta en este sentido. Al enmarcar al personaje político en situaciones graciosas carentes de todo significado político, y completamente aleja-



das de las decisiones y responsabilidades públicas, se refuerza el efecto delegador: el espectador busca en las características personales, en las reacciones individuales, un criterio para otorgar la confianza para administrar los asuntos públicos. La inmediata identificación con alguien desinvertido de poder y vulnerable al ridículo busca suscitar estos efectos delegativos. La farandulización del espectáculo político deviene en alegre y despreocupado fatalismo (no hay opciones debatibles acerca de lo que hay que hacer) y la impotencia ciudadana se reviste de relajado conformismo, profundizando la descolectivización, ya que la confianza se limita a rasgos personales, imagen o simpatía de los líderes, y no en grupos, proyectos o ideologías.

Sin embargo, la banalización de la política como cara amable del enmarcamiento mediático de la política de organización de la confianza en el modelo y las reformas neoliberales, era acompañada por la preservación celosa de su función en la organización de las reservas de desconfianza. En efecto, ante el opacamiento de la oposición política y la crisis sindical los medios de comunicación, quedaron a cargo del papel de “vigilantes” o “perros guardianes” de los políticos. En las épocas felices y exitosas del neoliberalismo en Argentina (1991-1997), no había competidores de talla en la pelea por la esfera pública contrademocrática monopolizada por los medios.

En cierta manera, los enmarcamientos mediáticos impulsaban los problemas y las soluciones al mismo tiempo: la “entropía” de la representación política (Rosanvallon, 2007, 30) y los riesgos de la delegación ciudadana impulsados por la banalización, se acompañaban por el enconado escrutinio vigilante sobre “la clase política” en el típico registro de “denuncia de la corrupción”. Proliferan los programas de “investigación”, cámaras ocultas, informes especiales sobre negociados, etc. La espectacularidad del género consiste en someter a los políticos “menores” (ignotos concejales o funcionarios de bajo rango) a situaciones despolitizadas, interpretables como burdas maniobras para sacar ventajas personales. De nuevo, se refuerza la idea de la descolectivización de la comprensión de la política cuyo campo de cuestionamiento parece reducirse a las muy mediáticamente vendibles “actitudes” morales dudosas o escandalosas. La personalización individualizada del lazo político transita por los registros de simpatía e identificación a los que se le agrega con gravedad solemne los requerimientos de “moralidad” individual. No son decisiones o cuestiones de decisión pública las que entran en controversia “moral” sino la idoneidad ética de los detentadores de este monopolio de la administración. En el mismo momento que se san-

cionaban leyes laborales, previsionales y financieras reñidas con las más elementales normas éticas, los medios alababan esas leyes pero denunciaban las maniobras y negociados de algunos de los que las habían sancionado.

La ciudadanía se convierte, vía estas dos formas de la mediatización, en una suerte de tribunal ético de espectadores fuera del juego político que se limitan a ejecutar sentencia en las próximas elecciones. La interpelación a la “conciencia moral” ciudadana es el fundamento del poder vigilante de los medios. Además, y siguiendo las tradiciones de la *prensa-ojo del pueblo*, aparecen formatos de programas de denuncias no tanto de la corrupción sino de la mala gestión o de la falta de respuesta a problemas públicos acuciantes (basurales, inundaciones, falta de agua, contaminación, enfermedades, deterioro de edificios escolares y de hospitales, etc.) donde hasta el nombre del programa suponía una “representación implícita”: “Santo Biasatti, el Ciudadano” asumiendo la clásica figura, ahora módica, del cuarto poder, del control civil. Como veremos más adelante, con la crisis, estos programas quedarían desactualizados por la eclosión de las protestas masivas y cambiarán de formato.

LA CRISIS Y EL ENMARCAMIENTO DEL DERRUMBE: LA RECIUDADANIZACIÓN EN LOS MEDIOS Y EN LOS MOVIMIENTOS

La llegada de la crisis económica (del Tequila en 1995, Malasia y Rusia 1997/1998) muestra de manera brutal la lógica de una apropiación/externalización de beneficios y una distribución socializada/internalizada de costos sin instancias políticas de mediación, brindando bases óptimas para el surgimiento de oportunidades para la acción colectiva no institucionalizada.

Si en las fases ascendentes, los esquemas descolectivizadores y delegativos del lazo político podían funcionar y ser aceptados para “distribuir los beneficios”, en cambio, con la crisis, estos esquemas muestran rápidamente su total incapacidad de conseguir apoyos para “distribuir los costos”. Es evidente que el intento de sostener “el gobierno de los políticos” (Nun, 2000) con la sola legitimidad electoral, reproduce lo que quiere evitar: redoblar las presiones sobre el sistema institucional y el surgimiento de actores demandantes no inscritos en los sistemas establecidos de intermediación de intereses. Antes del neoliberalismo, las crisis sobrecargaban los sistemas de decisión de manera plena o parcialmente institucionalizada, a través de sindicatos y partidos populares, vehículos colectivos de la ciudadanía fuertemente arraigados en la cultu-

ra política. Pero la erosión que sufrieron en los 90 abría la puerta para que las demandas se ejercieran de formas directas y no convencionales.

Los estallidos sociales, las puebladas y los movimientos de desocupados, junto con una reactivación de las luchas sindicales a partir de 1997, modifican de manera ostensible la agenda y los intentos enmarcadores ensayados por los medios. La llamada “cuestión social”, “los excluidos”, comienzan a incorporarse de manera progresiva a la cobertura noticiosa obligando a una modulación recolectivizadora de la política. Justamente lo que debe analizarse es el estatus concedido a estos grupos que logran ganar el centro del escenario político en algunas coyunturas: ¿cómo los medios enmarcaron el carácter de este renacido protagonismo?, ¿cómo atribuyeron identidades y agentividades?

De la pueblada al piquetero

La respuesta inicial de los medios ante la escalada de la conflictividad social no convencional, fue de omisión y atenuación: las puebladas que venían sucediéndose en varias provincias desde la crisis del Tequila durante 1995 y 1996 (Gómez, 1997), ocuparon poco las agendas de los comentaristas políticos y fueron tomadas, en general, como disturbios de grupos particulares recibiendo cobertura sólo las ocurridas en las provincias más importantes. Gravísimos incidentes y protestas que incluso culminaban con la renuncia de gobernadores en provincias pequeñas como Jujuy eran sistemáticamente omitidas o empequeñecidas por los grandes medios audiovisuales. Las condiciones del enmarcado noticioso de los medios nacionales eran simples: mudas imágenes de tomas de edificios públicos y, sobretodo, las refriegas y la resistencia a la represión policial. Muy poca cobertura de los motivos de las medidas, con ninguna nota a protagonistas y escasas y anecdóticas a dirigentes sindicales que encabezaban las protestas. Tampoco se reflejaba el impacto político sobre el gobierno nacional, sino sólo sobre los gobiernos provinciales. En definitiva, quedaba claro que los “silencios” y la atenuación que resultaban del estricto enmarcamiento como “disturbio” localizado y pasajero, era portadora de una esquema interpretativo que enfatizaba la poca importancia política y la futilidad del reclamo, buscando el efecto “espiral de silencio” (McLeod y Detember, 1999). El conflicto social era despojado de importancia, parecía no tener consecuencias nacionales. Los grupos que los protagonizaban, al no estar encuadrados dentro de las expresiones de la dirigencia sindical más conocida, los colocaban como conflictos “salvajes” o “apócrifos”, ya que ni siquiera se nombraban muchas veces las organizaciones que los impulsaban.

Pero el enmarcado más importante era la omisión del carácter multisectorial, y en cierta medida, policlasista que se observaba en las manifestaciones y protestas de estas puebladas: docentes, empleados públicos, trabajadores de la salud, se mezclaban con productores rurales, obreros despedidos, desocupados y comerciantes. En general, las imágenes y comentarios tendían a identificar “sindicatos” aislados ignorando el carácter heterogéneo y aluvional de la protesta que inauguraba un nuevo clima social de cuestionamientos al modelo de libremercado y concentración económica ahora en recesión.

Para mediados de 1997, la conflictividad social definitivamente marcaría un vuelco con el estallido del conflicto en la distante localidad sureña de Cutral Co. En efecto, la pueblada que se desata allí al frustrarse la instalación de una empresa de agroquímicos que hubiese ayudado a recuperar fuentes de empleo y actividad económica, supone la introducción de un tipo de medida de lucha inaudito: corte de puentes carreteros, de una ruta nacional, y la resistencia civil a los intentos de desalojo y cruda represión que se cobraría la muerte de una mujer. La inviabilidad política de la represión va a significar que este conflicto inaugure un nuevo ciclo de lucha social mediante la utilización de un repertorio radicalizado de acción colectiva: el corte de ruta. Mientras algunos medios locales, especialmente radiales, se convirtieron en vehículos del descontento y promotores de la protesta, los medios nacionales inicialmente volvieron a enmarcarla como “disturbios” locales sin mayores consecuencias a punto tal que, aún en los momentos más crudos del conflicto, casi no había corresponsales. Sin embargo, la prolongación en el tiempo de una suerte de amotinamiento cívico, dado que la población organizada en asambleas no reconocía las autoridades locales, obligó a los medios a tomar una cobertura directa de imágenes, acompañando con versiones de “presencia subversiva”, “terroristas de las FARC”, y otras versiones propaladas por los voceros del gobierno. Pero la patentización de una masiva participación de la población dio rápidamente por tierra con estos intentos.

Esta vez el formato televisivo inauguró una nueva tesitura enmarcadora que rompía con el canon sostenido durante el neoliberalismo: ya no se trataba de “disturbios” difusos y minimizables, sino de la irrupción de “algo nuevo”, un “nuevo actor político” que “había permanecido invisible”. Para ello, se sirvieron de la esquematización estereotipada de una figura con un fuerte potencial de espectacularidad: los jóvenes, en su mayoría desocupados, que para defenderse del frío

encendían fogatas nocturnas en el corte de ruta y cubrían sus rostros con pasamontañas –evocando al zapatismo– o pañuelos hasta los ojos –evocando la intifada palestina–, y que portaban palos o piedras para defenderse de un eventual intento de desalojo de parte de las fuerzas policiales.

Los medios legitiman el reclamo social y hasta lo dramatizan generando fuertes efectos cognitivos acerca de los costos sociales de las políticas llevadas adelante, pero descalifican o someten a controversia la legitimidad de la acción

Estas imágenes corporizaron, por primera vez, la figura del “excluido”, el desocupado, alguien no encuadrado en organizaciones políticas ni sindicales, alguien hasta ese momento silenciado, que había permanecido invisible y que ahora emergía pasando a la acción de manera espectacular. Los medios lograron introducir a nivel nacional un nuevo *ícono político*, es decir una imagen o espectáculo que por sí solo transmite formas de lectura acerca del sentido de lo que ocurre⁴, movilizándolo y poniendo en cuestión esquemas de interpretación anteriores. Los procedimientos nominativos de la prensa escrita no tardaron en imponerse: primero los bautizaron como los “fogoneros”, los que pasaban la noche en el piquete, los más pobres, los más “duros” en el sostenimiento de la lucha y los más desconfiados a la hora de parlamentar con las autoridades. Luego, se impondría el nombre “piquetero” que quedaría eternizado e incorporado al habla cotidiana como sinónimo de la rebeldía de los pobres, excluidos y olvidados, como figura de “outsider revoltoso” con connotaciones ambiguas de coraje, “aguante”, audacia, por un lado, y violencia, prepotencia o barbarie, por otro.

Las puebladas de la provincia norteña de Salta, apenas algunas semanas después volvieron a mostrar estas imágenes. El carácter disfórico de las acciones fue reemplazado por la sugestiva visualidad del más débil que se rebela encapuchado y bloquea las rutas ante la falta de respuestas y sensibilidad gubernamental.

Las grandes corporaciones de medios audiovisuales se dividieron en torno al enmar-

camiento a dar al nuevo actor social: estaban aquellos más conservadores y reaccionarios que intentaban mantener un enmarcamiento “demonizador” ya sea insistiendo con la “infiltración” de ultraizquierda que manipula a los pobres, ya sea poniendo en cuestión la legitimidad de las protestas –no ya de los reclamos– por los inconvenientes a otros particulares, las pérdidas económicas, etc. En este último caso, se opera una notable inversión de la focalización: el derecho a protestar por el reconocimiento de derechos se ve suplantado por la protección a los derechos de circulación y trabajo buscando la obvia identificación del público espectador como “víctima de la protesta”. Es decir, el derecho vulnerado deja de ser el centro del enmarcado ahora ocupado por los derechos vulnerados por el derecho a protestar.

En otras palabras, los medios legitiman el reclamo social y hasta lo dramatizan generando fuertes efectos cognitivos acerca de los costos sociales de las políticas llevadas adelante, pero descalifican o someten a controversia la legitimidad de la acción, operando simultáneamente una separación simbólica muy fuerte entre aquellos “excluidos” que luchan por la inclusión y los “incluidos” que se ven afectados por sus medidas de lucha.

En el relato mediático, la clave acerca de lo que estaba ocurriendo era: “los excluidos que luchan por ser incluidos”, evitando la idea de una crisis de desconfianza en el modelo aún de parte de aquellos que se consideraban incluidos. Es decir, la exacerbación de la identidad del excluido tenía por contracara un fortalecimiento de la identidad del incluido, lo que llevaba a omitir de discurso e imagen la pluriformidad social de los participantes, ocultando el papel de significativos sectores medios que impulsaron no sólo los cortes de ruta sino la resistencia a la represión. El caso de la asesinada Teresa Rodríguez, víctima de la desmesurada e indiscriminada represión policial en Cutral Co, es notable: no hubo casi cobertura de su historia, no hubo fotos en la tv, su carácter de mujer, madre de tres chicos y docente (es la primera versión que circulaba, luego se determinaría que se trataba de una empleada doméstica) hubiese puesto en tensión el enmarcamiento de un conflicto de los “excluidos” o de “violentos” piqueteros.

No obstante, este enmarcamiento mediático fue, por demás, exitoso. La opinión pública de las grandes ciudades no tardó en deslegitimar la represión y sensibilizarse por estas poblaciones olvidadas, lo que posibilitaba legitimar el crecimiento y la multiplicación territorial de las organizaciones de desocupados que luchaban por planes de asistencia social. Se produce entonces un maridaje involuntario entre al menos algunos medios perio-

4. Szas (1994) introduce la noción de ícono político como tipo especial de comunicación política que se lleva a cabo a través de imágenes “...la comprensión del significado [...] se da al presenciar un espectáculo sin palabras”. La retórica reivindicativa tiende a convertirse en iconografía (Klandermans y Goslinga, 1999).

dísticos que encontraron en estas formas agudas de conflictividad social una veta de espectacularidad a explotar y las organizaciones para las cuales el efecto de visibilidad y no demonización dado por algunos medios, equivalía a consolidar un marco de desarrollo y protagonismo muy importante.

El apoyo mediático se producía en tanto que se los mostraba privados de agencia política como una pura necesidad despolitizada y desindustrializada, y una identidad negativa por carencia –exclusión, marginalidad– como víctimas inocentes sin carácter de grupo afirmativo proactivo. Es decir, el enmarcamiento intentaba desenclasar la percepción de los grupos piqueteros negando el carácter de sujetos de decisión y de derecho. Para ello, apelaban muchas veces al corrimiento hacia los géneros de relatos humanitarios de historias personales y de carencias, buscando la indulgencia del público y un tratamiento despolitizado del fenómeno. El enmarcamiento icónico del piquetero tiende a mutar desde la inquietante “peligrosidad” del violento a la comprensión sensible y solidaria de su marginación y vulnerabilidad.

Por otra parte, al centrarse en un “ícono”, atenuando o desconociendo el carácter masivo y policlasista de las puebladas, este enmarcamiento mediático colabora o se alinea con la estrategia del gobierno nacional que opta por descartar las soluciones represivas⁵ y apuesta a concesiones de los llamados planes sociales (Gómez, 2006) como formas de desincentivar la protesta y, también, para intentar aislarla y restarle masividad.

La generalización de la distribución de planes sociales y ayudas, y su inclusión en todas las mesas de negociación, modifica el perfil de los conflictos que habían comenzado siendo multisectoriales y centrados en los problemas generalizados de las economías regionales. Los planes de empleo como respuesta a las “puebladas”, procuran desagregar intereses mediante una respuesta paliativa diferenciada para el sector que había demostrado mayores capacidades de acción colectiva disruptiva. Podemos decir aquí, que la estrategia de la política estatal de contención del conflicto social mediante políticas sociales paliativas contribuyó a estructurar un nuevo tipo de conflicto más “regulable”, con menor nivel de incertidumbre⁶, más aislable y menos masificable.

.....
⁵. No sólo por el rechazo cultural a la represión estatal heredada de las atrocidades de la dictadura militar, sino también porque la presencia de los medios y la “autonomía de producción y circulación de imagen” (cámaras digitales, web, etc.) operan como disuasores naturales de los intentos de represión sucia.

⁶. Acerca de este importante concepto para analizar los componentes contextuales de la acción colectiva, ver Ta-

Pero, por otra parte, esta estrategia de concesión da cuenta de una suerte de tácito y vergonzante reconocimiento estatal –y también de la opinión pública– a formas inéditas de organización, de acción y hasta de identidades colectivas y símbolos políticos de las clases populares.

La estandarización de los planes sociales como respuesta estatal ante los movimientos de desocupados contribuyen a dar forma a un actor social diferenciado por su imagen social (piqueteros), por sus reivindicaciones (planes y ayuda social), y por el tipo de acción colectiva (cortes de ruta). Los conflictos bajo el formato de “puebladas”, con sus asambleas masivas, sus coordinaciones multisectoriales, y sus pliegos infinitos de reivindicaciones, irán dejando el paso a las nuevas organizaciones “piqueteras”. Los medios colaboraron en la legitimación del reclamo específico y de las respuestas políticas concesivas condenando toda posibilidad de represión.

Pero también colaboraron en una política de “aislamiento” y particularización del reclamo, y en una estigmatización de las novedosas organizaciones y sus líderes, ocultando el carácter general que iba cobrando la oposición a las políticas económicas y de exclusión.

Lejos de neutralizar el potencial desafiantes de los desocupados, la distribución de planes y ayudas sociales impulsó aún más la organización colectiva en el ámbito territorial⁷, capitalizando los planes en términos de organización colectiva, sustrayéndose progresivamente a la influencia de las redes clientelares de la política tradicional. Los planes sociales abrían también una suerte de ventana de reconocimiento para las organizaciones sociales por parte de las burocracias estatales a través de la aprobación de los proyectos comunitarios presentados por las organizaciones.

Ante este proceso de acelerada organización popular, la visibilización de la acción y el

rrrow (1997, 181 y ss). No hace falta aclarar que los cortes de ruta seguían teniendo fuertes componentes disruptivos de desafío a la autoridad pública, y que los diversos ensayos de represión habían mostrado sus elevados costos políticos obligando a las autoridades a alguna clase de escenario de negociación con los movimientos.

⁷. En efecto, las organizaciones administraban, con criterio horizontalista, los planes conseguidos en los cortes de ruta y movilizaciones a los municipios, y además lograron autonomía para disponer los proyectos de trabajo mediante los cuales asignaban a los beneficiarios las “contraprestaciones” exigibles de manera tal de que las mismas fortaleciesen a la propia organización mediante la proliferación de comedores, merenderos, roperos, dispensarios, fábricas de bloques de construcción, además de realizar trabajos de mantenimiento de escuelas, zanjeos, y otros servicios de mejoramiento de la infraestructura social y física de los barrios.

protagonismo icónico del “piquetero”, se acompañaba de un hermético cono de sombra sobre las organizaciones y sus líderes: los mismos medios que contribuían grandemente a instalar en la agenda pública la cuestión de la desocupación, simultáneamente tendían a invisibilizar los logros en materia de autorganización, prestaciones y servicios comunitarios (comedores, merenderos, roperos, zanjeo y reparación de escuelas y hospitales, etc.) que las organizaciones de piqueteros alcanzaban, y contribuían de manera insistente a enmarcar la participación y la militancia en estas organizaciones como manipulación por parte de “caciques” territoriales que “pagaban” por ir a los cortes de ruta. Los reclamos eran válidos pero las organizaciones y sus dirigentes eran “corruptas”.

En realidad, este recurso “fácil” de deslegitimación opera a un nivel más profundo y general de los enmarcamientos mediáticos de la protesta y el conflicto social de las clases populares: la ocultación como sujeto agente, la eliminación de la posibilidad del actuar por sí, el no reconocimiento a su capacidad social y política, etc. El ocultamiento sistemático de las asambleas y debates entre los mismos integrantes del piquete sobre las mismas rutas, el ocultamiento de las instancias organizativas fuertemente horizontalistas fue suplantado por la centralización obsesiva de las cámaras en algunos líderes convertidos, en poco tiempo, en fuertemente mediáticos (Luis D’Elía, Juan Carlos Alderete, Raúl Castells). Se introducía la clave enmarcadora de que las organizaciones eran “manejadas” por mandamases omnipresentes y donde la participación de las bases era sólo de número y fuerza de choque en los piquetes.

Naturalmente, no se trata de un ocioso oximoron literario sino de una muy fuerte reivindicación de sus raíces en la clase obrera argentina y de presentarse como sujetos de derecho al trabajo genuino, y no como sujetos de necesidad de planes sociales

El ocultamiento o la atenuación visual de la participación femenina en los movimientos, notablemente mayoritaria según todas las investigaciones disponibles, era otro recurso para posibilitar la estigmatización de los movimientos.

En julio del 2001, se realiza la primera asamblea nacional de “Organizaciones sociales, territoriales y de desocupados” donde los organizadores intentaban rehuir del mote de “piquete-

ros”, sin embargo ni un solo medio de prensa, y mucho menos la tv, dejó de denominar al evento “asamblea piquetera”. Casi no se mencionó que la asamblea había sesionado en el auditorio de un colegio católico, que concurrieron casi 4.000 personas de casi todas las provincias del país, que los debates sobre la crítica situación de la argentina fueron de una enorme riqueza, que entre sus resoluciones se pronosticaba la crisis financiera y se exigía premonitoriamente la “nacionalización de la banca”⁸, que se recibieron adhesiones de movimientos sociales europeos y americanos, etc. En cambio, el eje excluyente de la cobertura noticiosa fue unos pequeños incidentes entre algunos grupos y, sobretudo, el apocalíptico anuncio de un “piquetazo nacional”. Es decir, en el enmarcamiento mediático, un centenar de organizaciones sociales de pobres de todo el país que coordinaban discurso y acciones era presentado como una reyerta entre grupos rivales de la que caóticamente salió un “plan de lucha” nacional.

Ya en la fase terminal de la crisis desde fines del 2001 hasta mediados del 2002, el nivel de incorporación del piquete a los medios era tal que un canal ofrecía en pantalla un mapa del país señalizando cada lugar donde había piquetes con carteles con dibujos esquematizados de gomas humeantes (los piqueteros cortaban el paso de los vehículos encendiendo gomas de auto en las calzadas de las rutas).

A medida que los medios van naturalizando en la opinión pública el escenario de cortes de ruta también cambian los sesgos enmarcadores. Ahora la proliferación de cortes y la ola piquetera que se abate sobre el país se hace sinónimo de “caos”, “anarquía”, la deslegitimación ya no se intenta por estigmatización negativa ni por invalidez de los reclamos sino por inconveniencia de “seguir echando leña al fuego”.

Asimismo, el desarrollo organizativo a esta altura inocultable comienza también a ser tenido en cuenta extendiendo y profundizando las coberturas de los piquetes que comienzan a incluir abundantes reportajes, notas de color, etc. Un recurso muy frecuente en los programas de entretenimiento con componentes periodísticos fueron los reporteros en el interior de los piquetes que, en la mayoría de los casos, consistía en tratar de detectar aquellos participantes del piquete

⁸ Los enmarcamientos suelen incluir diagnósticos, pronósticos, y motivaciones (Snow, 2006). Es claro que los medios buscan monopolizar el enmarcamiento de diagnóstico y pronóstico omitiendo o desautorizando las voces que en ese terreno puedan resultar disonantes, y busca simultáneamente objetivar y hacer foco exclusivo en el marco motivacional, los intereses y causas inmediatas que impulsan la acción de los movilizadores.

que habían ido a cambio de alguna promesa, o presionados por los dirigentes, etc. La disciplina y organización de los movimientos hacía que al no permitirse ni el alcohol ni las drogas en los piquetes, no se hubiesen registrado imágenes que son un canon de estigmatización en las manifestaciones de las clases populares. La esperanza de la obtención del plan o la ayuda social que declaraban los participantes del piquete, y los aportes que las organizaciones recaudaban de los beneficiarios de los planes obtenidos para gastos de la organización, eran tomados como evidencia de la manipulación y explotación a que eran sometidos los desocupados y de nuevo permitía desplazar la carga disfórica desde el reclamo y la medida hacia las organizaciones y sus dirigentes.

Estas incursiones mediáticas en la trastienda de los piquetes intentaban también jugar con el contraste de los embotellamientos de tránsito por un lado, y los piqueteros jugando al fútbol o a las cartas en el piquete intentando menoscabar el sentido de responsabilidad e instalar el carácter abusivo de los mismos.

La construcción mediática del “piquetero” como sujeto de necesidad manipulado ya por el gobierno, ya por punteros, mafias territoriales, o líderes personalistas, se topó con los intentos de los movimientos de una reivindicación muy fuerte de su identidad clasista y de su protagonismo histórico: una gran cantidad de movimientos locales se autodenominaban como “Movimientos de Trabajadores Desocupados”. Naturalmente, no se trata de un ocioso oximoron literario sino de una muy fuerte reivindicación de sus raíces en la clase obrera argentina y de presentarse como sujetos de derecho al trabajo genuino, y no como sujetos de necesidad de planes sociales. Además, a partir de mediados del 2001, cuando comienzan a coordinar acciones en el ámbito nacional, pugnan por aparecer como sujetos de decisión, ya que expresan su propio punto de vista acerca de las orientaciones generales del gobierno y condenan fuertemente el modelo neoliberal. Es decir, los enmarcamientos propuestos por los movimientos y sus organizaciones fueron típicamente agentivos, recuperando el sentido de responsabilidad y de derechos de opinión e intervención sobre el orden social desde sus propias posiciones, pertenencias e identidades históricas. A la imagen mediática de gente desesperada mendigando planes y ayuda social que habían presentado los medios, se le intentaba oponer la imagen de organizaciones populares con capacidad de trabajo y realización, y con capacidad de elaboración y expresión de sus propias opiniones y puntos de vista políticos.

Otros intentos de los movimientos para contrarrestar las estigmatizaciones y estereotipos a los

que los sometía el canon mediático, fue el claro intento de separarse de los “saqueos” de comercios y supermercados ocurridos en diciembre del 2001, condenándolos enérgicamente y responsabilizando a una conspiración política por ellos.

Se produce entonces una ofensiva de contraenmarcamiento de los movimientos: los dirigentes aparecen juntos para dar imagen de unidad y coherencia, se enfatiza el orden y la disciplina interna en las manifestaciones y cortes, aparecen los chalecos identificatorios y las gorritas masivamente, algunos grupos dejan de usar pasamontañas y dejan de ostentar los palos, las imágenes empiezan a transmitir la presencia de mujeres, niños, ancianos, los cortes de ruta son parciales, se dejan vías alternativas, se reducen los incidentes, etc. Los grupos piqueteros en medio del colapso y la desintegración terminan por vender la imagen de lo más disciplinado y organizado que podía encontrarse en el convulsionado panorama de la crisis de aquel entonces.

Sin embargo, la cobertura de los periodistas de calle seguían con un patrón sesgado: si las manifestaciones eran pacíficas, ordenadas, y con presencia dominante de mujeres y ancianos, había menos cobertura, pocas notas de trastienda, y no se daba micrófono a los participantes sino sólo a los dirigentes.

LOS ENMARCAMIENTOS DEL COLAPSO

La progresiva agudización de la crisis socioeconómica, a partir del 2001, fue modificando de manera notable las agendas de los medios y del periodismo. Las encuestas de opinión pública mostraban que sus índices de credibilidad e imagen caían junto con el conjunto de los poderes institucionales y la dirigencia política. La generalización a todos los niveles y clases sociales de las consecuencias de las políticas económicas ultraortodoxas de ajuste, derivaba en una pérdida de eficacia persuasiva de los mensajes mediáticos y mostraba un proceso agudo de pérdida de alineamiento entre el enmarcamiento ofrecido por los medios y la experiencia directa que la crisis le proporcionaba al público masivo. Las estrategias encubridoras y atenuadoras de los efectos de la crisis enmarcada en la clave “sólo afecta a los excluidos” y la defensa a las políticas gubernamentales por mercado tenían un costo de credibilidad muy serio.

Los intentos mediáticos de suavizar la “gravedad” de la crisis y, sobretudo, el hecho de que el periodismo no haya advertido a la población del alto riesgo de quebranto bancario, tuvo costos importantes en términos de confiabilidad.

En el 2001-2002, la crisis general puso en cuestión lo que los teóricos del enmarcamiento denominan “conmensurabilidad” (Amparán, 2006; Snow, 2006) “afinidad” o “consonancia” (McCarthy, 1999) de los marcos de la experiencia propia de los destinatarios de los mensajes con el enmarcado propuesto por el medio. Es decir, para que se produzca el efecto de resonancia en las audiencias, el enmarcado mediático tiene que ponerse en línea con la experiencia directa de los grupos y personas involucradas. El principio elemental de la fiabilidad de los enmarcamientos efectivos supone un mínimo de sintonía y correspondencia entre lo que muestran los medios y las vivencias cotidianas. El enmarcamiento “incluidos/excluidos” de la crisis social no daba cuenta de la experiencia inmediata de gran parte de la pequeño burguesía, los profesionales, y de los asalariados que sufrían rebaja de sueldos, confiscación de ahorros bancarios, inestabilidad laboral y desocupación endémica. La crisis abarcaba y pegaba relativamente mucho más fuerte entre los incluidos y ex beneficiarios de las reformas neoliberales que pasaban a sentir la amarga sensación de vulnerabilidad, ahora compartida con las clases populares. El principio general de que más efectivos son los enmarcamientos massmediáticos cuanto más alejado o distante de la experiencia inmediata está el tema que trata, mostraba que el enmarcamiento incluidos/excluidos era efectivo en tanto los supuestos efectos excluidores se circunscribían en sectores sociales o grupos fijos fácilmente identificables. Pero no mostraba la misma eficiencia cuando esos procesos de exclusión y deterioro se comenzaron a esparcir. La generalización de la vivencia de la vulnerabilidad y la exclusión, hirió de muerte el poder mediatizador de la percepción de las diferencias sociales en el esquema tranquilizador del “adentro/afuera”.

La dramatizabilidad de las crisis tan profundas lógicamente inauguran lo que se denomina *ciclos de atención* (McAdam, 1999) y brindan la oportunidad a los medios para realinear sus enmarcamientos en el sentido de hacerlo más congruente con las nuevas experiencias críticas y movilizadoras por las que atravesaban vastos sectores medios y altos, a la sazón sus principales clientes.

Es así que la manera de recuperar terreno fue plegarse al centro de la tormenta, incluso en el periodismo más identificado con las políticas noventistas. La veda visual de las puebladas en el interior del país de los 90, cedió paso a una suerte de hipervideoreality de la protesta metropolitana.

Connotados personajes de tradicionales discursos ultraliberales y “pro orden” a ultranza, veían con simpatía los cacerolazos y las movilizaciones y

escarches que proliferaban por los barrios de clase media. Ningún periodista quería “aparecer como oficialista” ni como defensor de “la clase política”, mucho menos como “menemista” que pasó a ser una mala palabra, ni como “represor”⁹. Eso sí, los enmarcamientos puestos en juego diferenciaban netamente a los piquetes de los pobres urbanos y desocupados que “alteran el tránsito” y perjudican a terceros, de los escraches a instituciones o domicilios particulares de dirigentes o los cacerolazos que son “la libre expresión de la opinión ciudadana”.

La atención pública en el espectáculo político ya no permitía tan cómodamente los tonos bizarros o banales, y además la corrupción ya no era una preocupación importante en la opinión pública al lado del desempleo endémico, la crisis social y la recesión. Así, las llamativas imágenes de piquetes, cacerolas y escraches desplazaron abruptamente los escándalos de corrupción. Los primeros meses del 2002 encontraban a todos los medios poco menos que “obsesionados” por los cacerolazos y los piquetes en la metrópoli. La política, la esfera pública, se había trasladado a las calles opacando de manera notable a la dirigencia política e invadiendo desordenadamente las pantallas. Los medios empezaban a dar el micrófono libremente a los ciudadanos indignados que, cacerolas en mano, salían a las calles a protestar contra la clase política, contra la corte suprema de justicia, contra los supermercados, contra los bancos, contra las empresas petroleras, contra las telefónicas, etc. mientras la dirigencia política parecía querer esconderse para no recibir los cachetazos, y desaparecía de los espacios mediáticos. Si en los piquetes los micrófonos sólo funcionaban para recoger testimonios sensibilizadores o para buscar motivaciones espurias en los participantes, en cambio en las movilizaciones de asambleas barriales, comerciantes, de sectores medios los micrófonos se apresuraban a “recoger la voz del ciudadano” (nunca había “líderes”) a la que se le reconocía agencia como para expresar sus preferencias y participar en la decisión de forjar un orden común.

El surgimiento del contra icono: “el cartonero”

Curiosamente, a medida que el desmoronamiento de la sociedad neoliberal afectaba a los supuestamente incluidos y a sus beneficiarios, los

.....
⁹ Sobre todo después del desastre de la masacre del Puente Pueyrredón, donde la policía asesina a sangre fría a dos militantes piqueteros desarmados. Los medios comenzaron abonando la teoría oficial de enfrentamiento entre ellos y provocaciones violentas a la policía, pero las fotos tomadas *in situ* fueron lapidarias y dejaron muy mal parados a medios de comunicación, gobierno y fuerzas de seguridad.

medios tendían a empeñarse en la visibilización de grupos marginales. La obsesión mediática por la argentina “oculta”, por las víctimas silenciosas de la década del 90, daba lugar a una proliferación de programas televisivos y abordajes desde la prensa escrita. Desde la inclusión en temas de ficción de las realidades de ocupantes ilegales de viviendas, de presos, hasta los informes especiales sobre la droga, la prostitución infantil, los chicos de la calle, el hambre, todo tipo de lacras en los barrios carenciados, y hasta la actuación de la policía en el delito entre pobres. Es una constatación de perogrullo que la enorme mayoría de estos programas enmarca claramente los tópicos que aborda combinando el plano de la sensibilidad humanitaria con la estigmatización fatalista del pobre devenido en figura al borde de la ley o amenaza latente a la seguridad, a los otros y a sí mismo. La “espectacularización” de la pobreza se realizó mediante un verdadero “cirujeo” mediático de internación en “submundos” con procedimientos que muchas veces rayaban en la violación de la intimidad¹⁰. Jugando con la obvia distancia y absoluto desconocimiento directo del espectador promedio de estos submundos, el efecto persuasivo del enmarcamiento se fortalecía. Estos grupos ofrecían toda clase de elementos visibles que podían ser aprovechados como recursos de simplificación primero, y de tácita generalización después, para fijar percepciones sociales sobre el fenómeno de la pobreza¹¹. La desagentivización y despojamiento de autorresponsabilidad de la figura del “pobre”, enmarcan la percepción de las diferencias sociales apelando a burdos recursos que en ocasiones bordean el racismo.

En esta misma línea aparece una oportunidad de generar un nuevo “icono” epocal en dónde condensar la significación de la catástrofe social. Los cauces de la cobertura mediática de la crisis comenzaron a centrarse en una nueva figura: el *cartonero*, es decir, las personas pobres, en general sin otras opciones laborales, que viven de la venta de lo que rescatan de la basura de las grandes ciudades. La elevación del precio del papel y otros residuos motorizó de manera notable una “inva-

¹⁰ La hipervisibilización de la marginalidad supone un nivel de “objetivación” mediática del sujeto que hace recordar los “zoológicos” humanos que se presentaban en algunas ferias europeas de fines del siglo XIX que exhibían aborígenes de las colonias.

¹¹ Sin embargo, es probable que semejante hiperrealismo social aumente el nerviosismo de las clases medias que se sienten más amenazadas por la inseguridad que viene de los pobres que por las expropiaciones que vienen del poder económico, y terminara legitimando indirectamente a los movimientos piqueteros en tanto “no convierten a la pobreza en un problema de seguridad”.

sión”, en general nocturna, de miles de personas, muchos niños y mujeres, que recorrían infatigablemente las calles de las urbes con carros a pulso recogiendo esos residuos reciclables cotizados por la desesperación. Los medios encuentran en el cartonero una figura noticiable sustituta en cierta medida del “piquetero”. Lo notable del nuevo enmarcamiento “icónico” es la visible deslegitimación de uno utilizando la figura del otro. El “cartonero” es construido mediáticamente como “aquel que se la banca sin molestar a nadie”, se las rebusca individualmente “sin caer en las transas con los políticos”. El cartonero es construido como “la verdadera víctima” excluida, un transparente sujeto de necesidad no contaminado por una perturbadora inclinación a pedir, protestar o pretender participar en las decisiones políticas.

El tratamiento de la agentividad del cartonero es una verdadera proeza semiótica que pretende reemplazar la épica colectiva de los piqueteros, por una épica personal, descolectivizada. Se construyen historias o biografías rápidas basadas en el esfuerzo individual para salir adelante “sin vergüenza” y sin arredrarse ante la “discriminación”.

El cartonero pasa a ser no un parásito “que vive de los planes sociales como el piquetero” sino alguien que se la “aguantó” y “se arremangó” para sobrellevar la crisis sin someterse a las mafias políticas y sin “joder a nadie”. El colectivo al que se debe el cartonero es “su familia”, su interés es “dar de comer a sus hijos”. Lejos quedan las pretensiones ideológicas de cambio social, las aspiraciones de “trabajo genuino”, de reconocimiento político, y las turbias “organizaciones” de desocupados manipuladas por caciques patoteros¹².

Todos los cuestionamientos que las organizaciones populares combativas recibían de los principales comentaristas de los medios, se convertían en loas a la sensibilidad social y exhortaciones lacrimógenas a la solidaridad cuando se trataba de los cartoneros. Una de las principales periodistas multipremiadas, Magdalena Ruiz Guiñazú, horrorizada porque había visto a una familia de cartoneros comer de una caneca de basura llegó a proponer que se separaran las sobras “comestibles” para que los cartoneros las recibieran de manera higiénica. De repente, el cirujeo (búsque-

¹² Demás está decir que la cobertura ocultaba el dispositivo comercial explotador y, sobretudo, las organizaciones y mafias que bajo control policial distribuyen a los cartoneros las zonas en las que se les permite trabajar a cambio de los correspondientes “peajes”.



da de productos en la basura) gozó de una ridícula “dignidad” y fue elevado a la categoría de “trabajo honrado” con connotaciones heroicas diferenciándolo claramente de las organizaciones de “vagos” que lucran con los planes sociales del gobierno. De un momento a otro, “todos tendríamos algo que aprender de los cartoneros” de su autosuficiencia silenciosa revistada de una suerte de altruismo por no “convertirse en un problema más”, por su “capacidad de ajustar sus expectativas y aspiraciones a la situación”. Aparece aquí un juego perverso esquizofrenizante: los cartoneros merecen la ayuda porque demuestran que pueden prescindir de ella, porque ni siquiera la piden. Se rescata su agentividad por no necesitar del apoyo y solidaridad y ni siquiera buscarla, por no elaborar sus necesidades como derechos, de forma tal de “permitir el gesto solidario de las clases medias”, y por mostrarse como autosuficiente sufrido, verdadero modelo ideológico óptimo del “pobre”.

Volvemos al paradigma más reaccionario de las *work houses* de la Inglaterra victoriana: “sólo quienes demuestran que pueden prescindir de la ayuda, la merecen”. Este discurso tuvo una pregnancia o penetración muy fuerte en los sectores medios urbanos movilizados: muchas asambleas vecinales o grupos barriales comenzaron con iniciativas de apoyo a los cartoneros, desde guarderías improvisadas para los más chiquitos, hasta comedores o merenderos y lugares de alojamiento para la noche.

Es claro entonces que el enmarcamiento en clave de la solidaridad/vulnerabilidad/ necesidad centrado en la figura del cartonero debe asociarse al desplazamiento del eje autorresponsabilidad/ interés/agentividad colectiva que intentaban instalar las organizaciones de trabajadores desocupados. La descolectivización de los sujetos de necesidad se acompaña de un claro intento de despolitización de la pobreza convertida en cuestión humanitaria y no en cuestión política.

Las estrategias de alineamiento invertido: el medio como protesta

Algunos programas televisivos comienzan un proceso de “internalización” de repertorios de protesta, es decir a proponer su propio protagonismo como agente de descontento, produciendo una especie de alineamiento invertido de marcos interpretativos: en vez de los descontentos, intentar penetrar en los marcos y las agendas de los medios, los medios intentan apropiarse de los marcos y las agendas de los descontentos.

Empiezan utilizando técnicas de ridiculización pública no ya dentro del código de la farandulización donde el político se ríe con la gente, sino

como verdaderos “escraches” mediáticos en donde el objeto del intento comunicacional es, de manera directa, destruir la confianza, el crédito público, de dirigentes políticos y sindicales. Los reporteros, ahora mediante recursos irónicos o satíricos, denuncian en la cara misma del dirigente –tomado por sorpresa en situaciones públicas– las fallas, debilidades, o consecuencias funestas de su actuación política, generando, algunas veces, reacciones de enojo o huida y hasta de agresión física o verbal hacia los periodistas. La crisis de representatividad y legitimidad de la dirigencia se expresaba en nuevos repertorios y enmarcamientos mediatizadores de la política que se plegaban a la consigna que marcaba la época: Que se Vayan Todos.

En este periodo de conmoción social y movilización generalizada, se observa una clara relación de complementariedad, por un lado, y competencia, por el otro, entre estos dos principios de organización de la desconfianza pública: los medios dan eco y permiten la visibilización e incluso la amplificación del descontento y la protesta, pero también se proponen no sólo enunciarla de una manera particular sino aspiran a vanguardizarla o sustituirla a su modo incursionando en el género del escrache¹³.

El caso más nítido de este procedimiento se comienza a dar a partir del 2003, cuando el ciclo de protesta cambia de tendencia y se reduce ostensiblemente la conflictividad social: aparecen programas en donde la estilización periodística de la protesta es notable. De nuevo surge la figura del periodista-ojo del pueblo, “Malnatti el Ciudadano” pero ya no consiste en una investigación que le da voz a los damnificados por las malas gestiones, y en un editorial que conmina a los decisores políticos a resolver los problemas “de la gente”. Ahora el periodista recoge los testimonios de los damnificados que no son escuchados por las autoridades, y las pruebas fehacientes de los problemas irresueltos y sus consecuencias, y a renglón seguido exhorta a los damnificados “¡Déjenmelo a mí!” y monta su propia forma “individual” de protesta generalmente basada en disfraces, parodias o situaciones risueñas a las que se someten por sorpresa las autoridades responsables, y cuya

¹³ Modalidad de protesta consistente en el juicio y el repudio público a instituciones o personas responsables de los agravios que afectan a los descontentos. En la Argentina la agrupación Hijos que nuclea a los hijos de los detenidos desaparecidos por la dictadura militar, perfeccionó de manera notable este repertorio de protesta para evitar la impunidad de los represores durante muchos años amparados en las leyes de obediencia debida y los indultos. Los hijos escrachaban con pintadas, cánticos, dramatizaciones, pegatinas, volanteadas, etc. las viviendas particulares de los represores y divulgaban entre sus vecinos los delitos que habían cometido.

culminación es alcanzar el compromiso del funcionario de resolver el problema en un plazo breve bajo apercibimiento de la vuelta del periodista a escracharlo si no cumple. Al final, el periodista se reencuentra con los damnificados que celebran el “éxito” de la protesta mediática. Este caso notable de “usurpación” de un repertorio de acción colectiva por parte de un programa de entretenimiento masivo, muestra la enorme potencialidad de captación y asimilación de los medios.

El enmarcamiento de sentido propuesto es inquietante: “los medios pueden hacer más eficientemente lo que la organización ciudadana arriesga a convertir en caos”. Los políticos tienen la oportunidad de reivindicarse haciendo gala de su ejecutividad y seriedad, y los ciudadanos depositan en los medios la defensa de sus intereses. El enmarcamiento interpretativo de este formato televisivo del conflicto social muestra un desplazamiento de la agentividad desde los sujetos (de necesidad o de derecho) hacia los medios. Al ceder su “voz” a los medios y recurrir a su patrocinio para elaborar y ejecutar la acción reivindicativa y la presión sobre los decisores, las clases populares son sustituidas como agentes eficientes de cambio. Además, este formato colabora con los intentos de reflotar la legitimidad de los canales institucionales de resolución de demandas y conflictos ya que, finalmente, los funcionarios son confirmados “gracias a los medios” como sujetos de decisión eficientes. Según esto, la autoorganización y la lucha dejan de ser necesarias, y mediante la intercesión de los medios, el “sistema” democrático funciona.

POSNEOLIBERALISMO Y CIUDADANÍA: PARODOJAS DE LOS NUEVOS DESAFÍOS SIMBÓLICOS

A partir de mediados del 2004, la relegitimación del sistema político, el crecimiento económico, y la mejora en la situación social de las clases populares, de nuevo modifica el escenario y ofrece innovadoras alternativas de enmarcamiento de la acción colectiva y sus componentes clasistas.

El ciclo descendente de la acción colectiva y la desmovilización relativa de los movimientos de desocupados, la casi extinción de otros (asambleas, ahorristas), la integración de sectores importantes de los movimientos populares al gobierno, y el apoyo de las clases bajas a las políticas del gobierno de Kirchner, fueron procesos enmarcados en los medios de diversas maneras.

En la medida en que se fueron efectivizando las políticas sociales masivas y la mejora de la situa-

ción social, el descenso vertiginoso del desempleo, junto con la incorporación de muchos líderes de los movimientos al gobierno (incluido Luis D’Elía), perdía su base el enmarcamiento identitario como víctimas vulnerables o sujetos de necesidad enfrentados espectacularmente a un poder político que no los escucha. Las protestas amainaban y quedaban a cargo de las vertientes duras de los movimientos vinculados a los minúsculos partidos de izquierda, mucho menos “noticiales”. Sólo la solitaria figura del piquetero R. Castells seguía concitando atención de los medios con su capacidad de movilización en el escenario callejero.

La irrupción de las demandas de seguridad

Un primer cambio en el perfil de la protesta fue la postergación progresiva de las reivindicaciones de emergencia social y el surgimiento de los temas de inseguridad y delito que reciben una notable cobertura de parte de los medios masivos más importantes. El dramático caso de un joven, víctima de un secuestro extorsivo, y asesinado durante su cautiverio, dio comienzo a una masiva movilización en pos de la modificación del código penal encabezada por el padre de la víctima, Juan C. Blumberg. Durante algunos meses, los actos con velas de los vecinos de los barrios pudientes de la zona metropolitana y las permanentes intervenciones mediáticas de Blumberg mostraban un enmarcamiento clasista notablemente distanciado de los que se habían utilizado para los piqueteros. Si bien el esclarecimiento del crimen podría ser enmarcado fácilmente como un reclamo de un sujeto de derecho, en realidad los medios adoptaron inmediatamente el enmarcado propuesto por el movimiento de Blumberg, y lo convirtieron no en un caso de reclamo de justicia sino en un reclamo de cambio en el orden jurídico y en la gestión de la seguridad pública, construyendo un sujeto de decisión.

La trastienda de las movilizaciones remarcaba el libre apoyo de los concurrentes, el carácter pacífico y nada obstructivo de los actos, la justificación categórica del reclamo, y la directa interpelación hacia el poder político y el poder legislativo. Además, la ausencia de organizaciones intermediarias o líderes —excluido Blumberg, tratado como una víctima más— permitía la construcción de un relato limpio y no contaminado del movimiento. El apoyo del dirigente piquetero R. Castells completaba la imagen de incuestionabilidad del movimiento. Sólo la militancia de los organismos de derechos humanos, piqueteros adeptos al gobierno, la izquierda y un sector minoritario del periodismo, evitó que se impusiera la ilusión de unanimidad denunciando que las

reformas solicitadas básicamente apuntaban a incrementar el poder de la policía y a bajar la edad de imputabilidad penal, lo que iba a derivar en un incremento de la criminalización de la pobreza. Finalmente, se organizó un contramovilización encabezada por organizaciones piqueteras y organismos de ddhh, que intentó romper el enmarcamiento único y la monotonía de apoyos a la movilización por la seguridad. Posteriormente, la incursión de Blumberg en el escenario político terminó por desgastar su imagen ante los mismos medios que lo habían entronizado.

Nuevas formas de exposición pública de las organizaciones populares

Otro aspecto del enmarcamiento de las organizaciones populares en el nuevo escenario es el que ensayan los medios sobre los exponentes públicos de sus posiciones o liderazgos. Es que al ceder notoriedad al escenario callejero, la visibilidad de los movimientos descansaba cada vez más en las apariciones públicas de sus líderes. L. D'Elía y R. Castells han sido aquellos dirigentes que más han profundizado su mediatización en el sentido de instalación y espacio en los medios. En el segundo caso, de una forma mucho más amigable y alineada con los dispositivos mediáticos: sin influencia política, recalcitrante y agresivo opositor al gobierno, sin recibir “prebendas del poder”, insistiendo en representar las víctimas de la pobreza y la desocupación, con un liderazgo crudamente personalista luego extendido con amplia repercusión mediática a su esposa, Nina Peloso, buscando formas de lograr repercusión pública apelando a acciones colectivas “noticiales”: marchas en pleno barrio de recoleta o puerto madero, huelgas de hambre, abrir un comedor popular en un paseo turístico, etc. Sin embargo, la declinación de la capacidad de movilización y de repercusión de la protesta, finalmente lo fue llevando a incursionar desprejuiciadamente en el mundo de la farándula, como asiduo visitante en programas de entretenimiento masivo. Los efectos mediatizadores suponen un riesgo muy alto de despolitización y banalización de la imagen de estos dirigentes.

En el primer caso, estrecho aliado del gobierno, con una dosis elevada de disrupción mediática, es decir, intentando la difícil estrategia de aparecer en los medios para romper con sus dispositivos, aún a costa de sufrir el hostigamiento mediático y una fuerte erosión de la imagen en la opinión pública. D'Elía y su organización –la Federación de Tierra y Vivienda, una de las más grandes del país– al contrario de otros dirigentes de movimientos sociales, buscó mantener en la exposición pública y ante los medios

de comunicación un protagonismo callejero de otra naturaleza que el del periodo 2001-2002. Así, las acciones de su organización encabezadas personalmente por él mismo con fuertes repercusiones mediáticas en este contexto de desmovilización y de integración política al gobierno, fueron varias: –participar en bloqueos a refinерías de empresas petroleras extranjeras en contra del aumento de los combustibles y su desabastecimiento; –encabezar una contramarcha a las convocadas por Blumberg con el tema seguridad, que le valió toda clase de ataques como patotero, autoritario, etc.; –tomar una comisaría involucrada en el asesinato de un militante de su organización; –realizar una expedición a un paraje desolado del litoral del país para romper una cadena con la que un millonario norteamericano había cerrado un camino público después de expulsar a algunas familias campesinas de la enorme extensión de tierras que había comprado sobre una de las reservas de agua potable subterránea más grandes de A. Latina; –proclamar su oposición al juez que investiga el caso de la voladura de la mutual judía en Buenos Aires y que procesaba a varios diplomáticos iraníes, viajando a Irán para mostrar solidaridad con los acusados y generando una reacción inmediata en las organizaciones comunitarias judías de la Argentina, lo que le costó su salida del gobierno; finalmente, participando en una contramovilización frente a los cacerolazos de clase media y el paro agropecuario que arrinconaba al gobierno, en la cual terminó golpeando a un manifestante que lo insultaba. En definitiva, las posiciones de D'Elía son fuertemente “noticiales” pero al costo de polarizar a la opinión pública mayoritariamente en su contra.

Es interesante ver los enmarcamientos interpretativos que ensayan los medios ante esta estrategia de fuerte inscripción mediática de D'Elía. En principio, a pesar de que muchas de sus intervenciones son fuertemente críticas al gobierno que apoya convencidamente, los medios tienden a mostrarlo como “hiperoficialista” interesado en el acceso a los recursos gubernamentales, en la clave de “lealtad comprada”. El desafío que significó plantear una disidencia en algo nada menos que una política interna con fuertes implicancias internacionales, y ante una investigación judicial tan delicada como fue el caso de la voladura de la amia, fue interpretado por el periodismo unánimemente como “exabrupto”, “locura”, “hambre de protagonismo”, “irracionalidad y extremismo político”, “racismo antisemita” o lisa y llanamente haber sido comprado por los árabes o por Chávez. Algún periodista incluso reclamó que lo censura-

ran: “¿que se calle!”, “¿por qué el gobierno no lo hace callar?”. De nuevo se desplazó completamente el foco del enmarcamiento desde los motivos de su posición¹⁴, a las consecuencias o repercusiones y rechazos de la misma. Se ocultó o apenas se mostró el hecho que otras personalidades públicas, entre ellas un reconocido sacerdote católico, y otros movimientos sociales y de izquierda lo acompañaban en su posición, sin contar que algunos sectores mismos de la comunidad judía también oponen reservas a la actuación de la justicia argentina.

Nuevamente aparece una clave de interpretación subyacente según la cual no existe legitimidad para el agenciamiento político de las organizaciones populares que no tienen habilitados algunos o muchos temas de la agenda política pública. Si incursionan en ella, son brutalmente caracterizados como “no sujetos” cuya voluntad está viciada de defectos intelectuales o morales que la invalidan, lo que obvia o hace innecesario considerar sus argumentos o el contenido de esas posiciones. Cuando las posiciones asumidas por estos sectores se autoenmarcan como sujetos de decisión, enunciando sus preferencias en cuanto al bien común, proyectos u orientaciones para el conjunto y juzgando decisiones políticas en el plano internacional, los medios contraenmarcan las enunciaciones vía descalificación del enunciador y omisión de los fundamentos de la enunciaci3n.

Tambi3n es un recurso contraenmarcador jugar con la disociaci3n entre el sujeto-epist3mico y el sujeto-agente, atribuy3ndole a D’Elía la intenci3n no de oponerse de manera leal a una decisi3n gubernamental y participar en la esfera p3blica del debate democrático, sino la intenci3n de “apretar” al gobierno desde una alianza internacional con el chavismo, “su nuevo patr3n”. Se busca instalar la imposibilidad de pensar a las clases populares como fuente de voluntad aut3noma, y fatalmente instrumentadas por alguien m3s poderoso. Estos periodistas terminaban por pedirle al gobierno “que no sea d3bil” y lo expulsa del gobierno, cosa que finalmente ocurri3 aunque sin romper el apoyo del movimiento y del propio D’Elía con el proyecto pol3tico gubernamental.

El fantasma que agitaba este contraenmarcamiento mediático es interesante porque, al mismo tiempo que tiende a estigmatizar y demonizar, no puede evitar un efecto de magnificaci3n de la importancia y el poder de estos

.....
¹⁴. Efectivamente, los defectos de los procesamientos dictados por el juez y la actuaci3n del fiscal dejaban muchas dudas, y un análisis de los efectos sobre los alineamientos internacionales de nuestro pa3s que quedaba pegado a la pol3tica antiterrorista de Washington, fueron omitidos por los medios.

dirigentes. La preocupaci3n y el rechazo que suscitaba D’Elía se acompañaba del temor a que “no fuera solo un mercenario servil”, una “marioneta del presidente”. Este tipo de esquemas interpretativos dan lugar a dilemas: si las organizaciones populares y sus líderes mantienen un perfil bajo son “compradas” y “serviles”, mera fuerza militante o electoral del gobierno despojadas de verdadera agentividad; si, en cambio, toman posiciones fuertes en planos que se prejuzga como vedados, son “peligrosas” y desestabilizadoras aún para el mismo gobierno del que son aliadas. Es claro que el enmarcamiento mediático no puede reconocer nunca la legitimidad del carácter de sujeto de decisi3n, de ciudadanía plena en la esfera p3blica, a las clases populares organizadas y sus líderes.

De forma semejante cuando las organizaciones sociales adeptas al gobierno bloquearon algunas refinerías petroleras o causaron incidentes ante algunas empresas de servicios p3blicos se las enmarcaba no como legítima protesta contra el encarecimiento de tarifas y combustibles sino como “apretada” a los empresarios ordenada por el gobierno. Al revés cuando tomaron la comisaría en plena Capital Federal, los medios y muchos periodistas “formadores de opini3n” lo consideraron un acto peligroso de desobediencia civil cuasi subversiva que ponía en una situaci3n de debilidad institucional al gobierno y a D’Elía como un “incontrolable pol3tico”. Nuevamente la medida de protesta servía de pretexto para opacar el motivo del asesinato de un militante de la organizaci3n.

La centralizaci3n en un personaje p3blico tiene dos consecuencias ambiguas: por un lado fortalece la idea de clases populares inorgánicas sometidas a líderes pero, por otro, la captaci3n de la atenci3n p3blica obliga a introducir en la agenda de los medios temas de las clases populares que de otra forma quedarían omitidos. Los medios pueden condenar a D’Elía pero para hacerlo deben mínimamente incluir en sus agendas las cuestiones que trae. En este sentido, la iniciativa la llevan los movimientos, los medios están obligados a retomar temas que no son propios. Los medios pueden condenar y erosionar seriamente la reputaci3n y la imagen de D’Elía, pero se muestran muy débiles y evasivos para contrarrestar el contenido de sus posiciones. La estrategia de rechazar los reclamos o las posiciones por el simple expediente de rechazar o desautorizar al vocero es una estrategia débil. Así los movimientos tienen una victoria pírrica si se quiere: logran cierto control sobre la agenda de temas centrales pero al precio de ser objetos de permanente hostilidad deslegitimadora por parte de los medios.

LA QUERRELLA CLASISTA POR LA CIUDADANÍA: ¿QUIÉN ES EL PUEBLO?

Las clases populares en el poder político

Una situación que desafía los enmarcamientos mediáticos es el hecho de que, luego de muchas décadas, gran parte de las clases populares adhieren y apoyan activamente o, aún más, participan en la gestión de un gobierno. El hecho político de que movimientos sociales contestarios, con identidades atribuidas inescindiblemente unidas a las necesidades, las injusticias y la protesta, ahora se movilizan para apoyar medidas o a favor de un gobierno, y que sus dirigentes sean nombrados funcionarios, elegidos diputados y demuestren una cercanía y acceso al presidente y a los centros de decisión política, constituye un escenario casi inédito para los medios, y un nuevo desafío para sus intentos enmarcadores. Si a esto agregamos que en Argentina, como en todos los países de A. Latina que ostentan gobiernos anti-neoliberales con apoyos de clases populares, las grandes corporaciones mediáticas y la mayoría del periodismo es fuertemente crítico o directamente está en situaciones de conflicto con las autoridades gubernamentales (Venezuela, Bolivia, Ecuador), tenemos un panorama más que novedoso. El enmarcamiento de los medios basado en los sujetos de necesidad y la protesta ya no funciona para interpretar fenómenos como el protagonismo político en la escena pública y en la arena política. Las pretensiones de los movimientos populares ya no pasan por visibilizar sus reclamos y “ser escuchados”, ni siquiera formulan demandas particulares, sino que pretenden incursionar en decisiones y orientaciones políticas generales, muchas veces dándose el lujo de criticar al gobierno del que forman parte.

Los enmarcamientos de los movimientos que los constituyen como sujetos de decisión, como protagonistas con pretensiones de centralidad en un proceso político, han desatado una serie desordenada de contraenmarcamientos paradójicos por parte de los medios.

A veces apelan al recurso de la metáfora de la domesticación, “los dirigentes sociales oficialistas” son representados como “punteros” o caciques territoriales tradicionales que disputan poder y recursos con los mismos métodos vituperados en el 2001. En este sentido, la idea es reenmarcarlos como “recién llegados a la clase política y sus códigos”. En sintonía con la oposición de izquierda recalcitrante, la sentencia de “traidores a las bases que representaban”, “vendidos al go-

bierno”, etc. queda implícita en estos enmarcamientos que gustan hablar de “los autos con chofer”, “los despachos de los dirigentes”, “los cargos que reparten entre familiares”, y cosas por el estilo. El guiño al arraigado aforismo “que el poder todo lo corrompe” funciona como alineador de marco, generando un posible efecto de fiabilidad. Por supuesto, se oculta que los dirigentes siguen viviendo en los mismos barrios humildes de donde vienen, muchas veces se obvian las imágenes de su presencia en actos protocolares porque sus humildes vestimentas contrastan con las del resto del funcionariado y empresariado presente, etc.

Otros intentos enmarcadores los presentan como incorregibles inadaptados y violentos, se les atribuye el rol de “fuerza de choque” del gobierno, una suerte de “camisas negras” (dice el periodista Mariano Grondona, agitando el fantasma del fascismo) al servicio de un poder con tendencias autoritarias, etc. Es decir, no es que los piqueteros se sumen al gobierno sino que el gobierno es “piquetero”. Otras veces, el mismo periodista, de manera del todo contradictoria, los presenta como “una molestia que debe soportar el gobierno para no tenerlos en contra”, es decir, se los caracteriza como opositores encubiertos que sacan ventaja de la debilidad del gobierno y al cual van a abandonar o del que van a ser echados en cualquier momento. En este planteo los “piqueteros” ocuparían el papel que, en su momento, ocuparon los “Montoneros” (una organización guerrillera de los 70) en la última experiencia política donde las clases populares también accedieron al poder político. Evocando la figura de “infiltrados” del peronismo, se les reconoce a los dirigentes de los movimientos una gran autonomía, poder organizacional y juego propio frente al gobierno, y se insiste en que cumplen un tenebroso papel político que combina ideologías extremistas incompatibles con la del gobierno y la democracia, intereses materiales corporativos de sus organizaciones “crecidas al calor estatal”, un factor de perturbación o provocación, que además ahuyenta las inversiones, disminuye la credibilidad y la imagen de seriedad del gobierno, etc. En esta clave se magnifican los desafíos y las desavenencias con el gobierno, se los asocia a intereses internacionales extraños (los árabes, el chavismo), a actitudes personalistas, a fanatismos ideológicos retrógrados, o lisa y llanamente al desorden, y la falta de seriedad de quienes no manejan “los códigos de la política seria”.

La irresolución del enmarcamiento en cuanto no logra simplificar y estereotipar de manera fija y creíble estos protagonistas que suelen ocupar en varias coyunturas el centro de la escena, debe ser considerada un verdadero éxito de los movimientos. La vacilación en la forma de enmarcarlos es

letal para alcanzar fiabilidad. La incómoda institucionalización e integración a la esfera pública y las pretensiones de legitimidad en la participación en las decisiones políticas, somete a los medios a un jeroglífico comunicacional. Los encasillamientos sucesivos y diversos destruyen su eficacia simbólica y tienden a neutralizarse entre sí. Por otra parte, la volatilidad de los procesos enmarcadores potencia la tendencia a visibilizarlos mediáticamente: todos los medios quieren sumarse al enmarcamiento del fenómeno ensayando alguna fórmula nueva. Esta debilidad e incoherencia en los enmarcamientos no necesariamente exime a los dirigentes y a los movimientos de un deterioro de su imagen ante la opinión pública que miden las encuestas. Los dirigentes y los movimientos piqueteros son los que tienen menores niveles de aceptación dentro del espectro de movimientos sociales pero son los que gozan de un grado mucho mayor de conocimiento por parte del público. En realidad aunque los porcentajes de rechazo sean mayores, los menores porcentajes de apoyo se convierten en más cantidad neta de gente que los apoya respecto de otros movimientos sociales o dirigentes no tan conocidos.

Las clases dominantes en la calle

El otro desafío, en términos de enmarcamiento de la protesta, proviene de la aún más inólita inversión de roles sociales habituales: la movilización y el recurso a la acción colectiva frente a estos gobiernos, proviene de las clases acomodadas y de parte de las clases medias disconformes con los estilos políticos y el intervencionismo estatal en la economía. Los medios ensayan un enmarcamiento de la protesta completamente diferente de los conocidos en el pasado, crudamente legitimador utilizando claves de ocultamiento y atenuación, y claves de simplificación y estereotipo en un sentido inverso al utilizado para las protestas de las clases populares. Fue el caso de las movilizaciones por la “seguridad” y es el caso del prolongado conflicto del gobierno con los productores rurales por los derechos de exportación de la soja y otros granos durante este año (Gómez, 2008).

Las medidas de lucha a las que apeló el empresariado rural fueron de un tenor desconocido aún para los días más críticos de la crisis social del 2001-2002: bloqueos de rutas¹⁵ e intentos de desabastecimiento de comestibles a las

grandes ciudades, y finalmente cacerolazos bastante masivos en los barrios pudientes de varias grandes ciudades. Las imágenes de los camiones tirando leche o alimentos frescos a las zanjas de las rutas, fueron transmitidas una y otra vez pero bajo un formato discursivo en donde tácitamente la falta de respuesta gubernamental era la responsable. Casi no se transmitían las imágenes de los ruralistas obligando a los camiones a detenerse y deshacerse de su carga. Al contrario, los ruralistas eran mostrados conversando con los camioneros, en momentos en que otros transportistas o pasajeros los aplaudían, etc.

Es curioso que ante la inimaginable radicalización del corte de ruta por parte de un sector pudiente de la población que entra en rebelión fiscal, los enmarcamientos mediáticos se esmeraron en presentar la inflexibilidad y rigidez de los cortes y la convicción combativa “valiente” y decidida de los chacareros. Lo que para otros sectores era considerado un delito, ahora aparecía revestido de “sacrificio” por pasar la noche en el frío de la ruta y valor para enfrentar a una posible “represión”. En este enmarcamiento, la “determinación” y el coraje que demostraba la elección de un repertorio tan radicalizado, insólitamente era presentado como prueba o indicio de la legitimidad del reclamo.

Los manifestantes que salían a la calle con sus cacerolas o recorrían la ciudad tocando bocina a bordo de autos de lujo eran obsesivamente transmitidos en vivo como en las mejores épocas de la crisis social y enmarcados como “ciudadanos pacíficos que quieren hacer oír su voz ante un gobierno sordo”. Es fundamental, en este punto, el énfasis en el carácter “desinteresado” del cacerolazo en apoyo al campo. Los descontentos son presentados como puras “conciencias” que quieren lo mejor para el país sin ningún interés propio de por medio, y que su apoyo al campo “es apoyar al país que trabaja y produce”. La inmediata identificación del campo con el país, y de la clase media y alta movilizadas con el ciudadano que quiere el bien del país, buscaba a través de la saturación mediática, generar la “ilusión de unanimidad” y provocar una situación de agudo aislamiento del gobierno. Sólo la contramovilización de los movimientos sociales, primero, y de los sindicatos más tarde, lograba romper esta maniobra generando nuevos problemas de enmarcamiento.

El reclamo de menos impuestos para sectores que están con altos niveles de rentabilidad, es enmarcado como “abuso” del gobierno o voracidad fiscal que busca fondos para sostener el “gasto político” en perjuicio de los honrados y laboriosos productores que “hacen la riqueza del país”. Es

¹⁵ Repertorio que habían utilizado los “piqueteros” que demandaban empleo y alimentos en la crisis del 2001-2002. Los medios no calificaron en ningún momento a los ruralistas de piqueteros, y ni siquiera de empresarios. La nominación legitimadora como “chacarero” o “productor” buscaba un obvio aplanamiento de la percepción social del conflicto como de “clase media” trabajadora.

decir, el procedimiento enmarcador del reclamo tiende a no separarlo del actor sino a validarlo por la calificación diferenciada del mismo. El gran relato mediático del conflicto se basó justamente en una sobrelegitimación casi caricaturesca del “sufrido y próspero” productor rural pequeño y mediano. Se obviaban imágenes de los productores más pudientes, se centralizó en un personaje –ex dirigente de izquierda– directivo provincial del empresariado mediano agropecuario, que desde el acento en el habla hasta los estilos campechanos y gestos de inocencia, podía cumplir el papel evocador de la identidad cultural hegemónica de la argentina tradicional en su esplendor (basada en las riquezas agropecuarias). El debate sobre los derechos impositivos y la legitimidad de la renta privada extraordinaria de los productores fue enmarcada en una interpretación acerca de “los merecimientos personales”, “la productividad y el riesgo empresarial”, “la laboriosidad”, e incluso “el progreso y la tecnificación” por lo que las imágenes de modernas camionetas y maquinaria agrícola era congruente con la clave de interpretación propuesta que desplazaba completamente a las cuestiones relativas a la distribución de la renta y la equidad social, que eran los enmarcamientos propuestos por el gobierno y la coalición de movimientos sociales y sindicales que apoyaban la medida gubernamental. El enmarcamiento de justificación y validación del reclamo sobre la base del reconocimiento al merecimiento personal derivó en algunos osados intentos simétricos de deslegitimación de la bandera de la equidad y la distribución tradicionalmente arraigada en nuestro país. Desde las suaves: si el productor no gana lo que merece, no invierte y, si no invierte, no hay generación de riqueza ni distribución posible; hasta las más reaccionariamente agresivas: “¿distribuir el ingreso es sacarle a los que trabajan para darle a unos vagos, a unos parásitos que viven del gobierno para que los voten?”, etc.

No se trata tanto de una reaparición del discurso neoliberal. El mercado o la propiedad privada han estado ajenos a las justificaciones explícitas de la demanda

La descalificación implícita de la legitimidad electoral a partir de que los votos que permitieron el acceso al gobierno están “comprados con nuestra plata” supone no sólo una reducción de las clases populares a una clientela política sin

voluntad, sino también un cuestionamiento “contrademocrático” –en términos de Rosanvallon– de que no se reconoce al voto como suficiente legitimación de la autoridad: las manifestaciones de la voluntad en la calle de estos sectores tiene pretensiones de legitimidad política, al menos como “poder de veto”. En la construcción enmarcadora novedosa de esta “contralegitimidad” es muy importante el papel de los medios: la cobertura de las protestas funge como multiplicador de las mismas protestas y además ofrece una visión de “enmarcamiento único” entre el medio y los manifestantes que refuerza el efecto de unanimidad y, sobretudo, de “obiedad” incuestionable acerca de la naturaleza del “verdadero pueblo”.

Otro de los enmarcamientos era la caracterización del gobierno como “excluyente” de las clases medias, como unilateralmente orientado hacia las clases populares y los sindicatos. Todo ello abre una suerte de controversia acerca de qué sectores deben ser los que merecen la atención del gobierno y la centralidad social. Entre los manifestantes las exhortaciones a que la Presidenta recientemente electa “abandone a los D’Elías”, a que “gobierne para todos”; la diferenciación que hacían no sólo los medios sino también los manifestantes entre “gente” autoconvocada y “colectivos” llevados por el gobierno; las alusiones a las diferencias entre quienes “actúan con conciencia y los pobres que tienen que apoyar al gobierno por un plan social o un bolsón de alimentos”, son todos recursos que apuntan a la constitución simbólica de un “verdadero pueblo” de los “verdaderos ciudadanos republicanos” y la deslegitimación y menoscabo de los avances en la ciudadanización política de las clases populares entendida como “manipulación” y “compra de lealtades”. En este sentido, dirigentes empresarios rurales, manifestantes, noteros en la calle y periodistas comentaristas en estudio, parecían alinear sus marcos interpretativos en perfecta correspondencia.

El dispositivo de continuidad discursiva entre periodistas y participantes en las protestas forzaba la impresión de indiferenciación entre el enmarcamiento periodístico y el enmarcamiento de los movilizadores. Aún más, el “clasismo” explícito puesto en juego en las transmisiones en vivo por parte de noteros y movileros llegó al extremo en el momento en que los movimientos sociales adeptos al gobierno salen a la calle para contrarrestar la movilización en algunas grandes ciudades de parte de los sectores medios en apoyo al campo: “De un lado, los ciudadanos que protestan pacíficamente y del otro los piqueteros que vienen a desalojarlos”. Expresiones de este tipo se multiplicaron en casi todos los canales. La definición de

que el “verdadero pueblo” era el que estaba protestando y que los demás eran patoteros pagados por el gobierno, fue suscripta de manera burda a través de imágenes y testimonios e intervenciones periodísticas. El nivel de desprecio demostrado a los que osaron manifestarse a favor del gobierno fue tal, que la Facultad de Ciencias Sociales de la Uba emitió un comunicado repudiando por discriminatoria y falto del más elemental profesionalismo la cobertura de estos hechos realizada por algunos canales de la tv privada.

La ilusión que se convierte en imperativo de que el pueblo es el pueblo de clase media y que el pueblo de clase media aspira a progresar y convertirse en clase alta sin los vicios de la clase alta, y que únicamente un pueblo como éste puede construir una argentina grande, son parte de este discurso que claramente le reclama al gobierno que incluya las reivindicaciones de estas clases en sus políticas. Frases como “nosotros también somos argentinos”, admoniciones como “nosotros somos los argentinos que valemos la pena Sra. Presidenta”, se escuchaban permanentemente.

La sinergia entre enmarcamientos mediáticos y protesta apunta a golpear los lugares de validación y enunciación política del kirchnerismo (distribución, reconocimiento político a las organizaciones populares, intervención del Estado), son desestabilizados, y la legitimidad que se le reconoce es solamente formal “ganó las elecciones hace 6 meses”, pero no sustantiva: “el verdadero pueblo somos nosotros y estamos hartos queremos otra cosa”. Este intento agresivo de instauración de una nueva agenda política en un proceso enmarcador reinterpretativo y resignificador, ha sido descrito por algunos como “clima destituyente” peligrosamente próximo al golpismo visto en Venezuela o los intentos desestabilizadores recientes en Bolivia.

No se trata tanto de una reaparición del discurso neoliberal. El mercado o la propiedad privada han estado ajenos a las justificaciones explícitas de la demanda. El guiño de complicidad legitimante, la fidelidad narrativa con la cultura política del momento fue, sin duda, retomar el repertorio y el discurso antipolítico de la crisis del 2001, operando una reformulación del Que Se Vayan Todos. En vez de la “gente” versus “los políticos”, se presentó la forma más concreta de “el campo=la gente que vale=el verdadero pueblo” versus “los políticos K (alusión al kirchnerismo)=manipuladores de pobres”.

Lo que se intenta instalar es la primacía de los intereses de un sector (el campo, la clase media) como los centralmente dinámicos y progresistas, de los que depende la prosperidad del conjunto, en lugar de los intereses de las clases

populares “manipuladas por el gobierno” y que, por supuesto, solamente pueden ser beneficiarias de una prosperidad que nunca puede ser propia o producida por ellas. Este enmarcamiento cuestiona el papel del estado y el papel de las clases populares en la distribución de los excedentes económicos. En este esquema de percepción de amenazas, la clase media se autopercebe acechada no por un desarrollo basado en la concentración de la renta agropecuaria privada (que con la inflación convalida en los precios internos la ganancia extraordinaria de los productores exportadores), sino por un gobierno que “expropia” a los que trabajan y producen para distribuir entre las clases parasitarias que lo votan.

Todo esto se puede sintetizar en la exclamación de un concurrente en el último cacerolazo: “Los blancos también somos argentinos Sra. De Kirchner, ¡también tiene que gobernar para nosotros!”. El conflicto con el campo aparece como impugnación para cambiar el sesgo de clase de las políticas de gobierno.

La atribución de ciudadanía se realizaba de manera discriminatoria: sólo los que caceroleaban tenían derecho a protestar y expresarse, a los otros los invalidaba el hecho de depender de los planes que les “regala” el gobierno. Otras claves noticiosas fueron “comprender” a los pobres que son arrastrados por dirigentes inescrupulosos como D’Elía, o que por su “nivel educativo” no entienden lo que ocurre y son manipulados. Otros más cuidadosos de las formalidades del derecho de expresión, remarcaban la innecesidad de manifestarse a favor del gobierno por el riesgo de la violencia, dejando implícito que la violencia sólo podría provenir de las clases populares.

Pocas veces, seguramente, se podrá acceder a situaciones como las ocurridas las noches del 25 de marzo y el 16 de junio últimos, donde las coberturas periodísticas fueran tan nítida y casi caricaturescamente sesgadas por criterios clasistas de todo tipo. Desde “Cómo D’Elía va a ser pueblo con lo feo que es” hasta “¡Vagos vayan a trabajar!” donde se condena a las clases populares a un destino exclusivo de fuerza de trabajo vedándoles directamente los derechos políticos de expresión.

CONCLUSIONES

La teoría del enmarcamiento ofrece un arsenal conceptual muy importante para indagar la producción y circulación de significados en torno a las identidades sociales involucradas en la lucha política y el conflicto social. Los movimientos sociales emergidos del derrumbe de las reformas estructurales de inspiración neolibe-

ral han desarrollado procesos enmarcadores de sus identidades, reclamos y acciones que han entrado en relaciones variables, tensas y contradictorias con los procesos reenmarcadores o contraenmarcadores que ensayan los medios de comunicación.

La pugna por la definición de la ciudadanía; quiénes, cómo, y en qué pueden ser reconocidos como sujetos agentes de voluntad política, es materia de una lucha simbólica que evoluciona y trasmuta con las coyunturas y los propios resultados de los ensayos enmarcadores pasados.

Sin embargo, el caso argentino muestra la continuidad de los sesgos clasistas de los esquemas de interpretación que se intentan poner en circulación desde los medios. En ellos, las clases populares son representadas en claves deslegitimadoras de su papel político no reconociéndoles capacidad como agente de cambio y sujeto de decisión. Sus potencialidades sociales y políticas son permanentemente relativizadas, opacadas, distorsionadas, ocultadas o simplemente negadas. Contra estas tendencias, los movimientos han desarrollado estrategias muy variadas que buscan aprovechar las oportunidades de resonancia y repercusión que ofrece la escena mediática, tratando de evadir o minimizar los efectos de sus enmarcamientos, apelando a una intensificación de su protagonismo mostrando fuertes dosis de autonomía política –aun respecto del gobierno que apoyan– y de capacidad de intervención en variadas circunstancias.

Por su parte, los medios también modifican con notable plasticidad y rapidez sus formatos de cobertura sobre la protesta social y, ante un gobierno con el que mantienen evidentes diferencias de intereses económicos, optan también por profundizar o intensificar su papel de intervención en el conflicto político y social. En la medida que los medios tienden a realizar opciones políticas tan visibles a través de los procesos enmarcadores, es difícil saber cuáles son los límites de tolerancia al riesgo de pérdida de fiabilidad y credibilidad en el futuro. ♦

BIBLIOGRAFÍA

AMPARÁN, AQUILES. *El “análisis de marcos” en la sociología de los movimientos sociales* en Aquiles Chihu Amparán (Coord.), México, Ed. Miguel Angel Porrúa, 2006.

BECK, U. *La invención de lo político*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1993.

BOURDIEU, PIERRE. *El sentido Práctico*, Madrid, Taurus, 1980.

ESCOBAR, A.; S. ALVAREZ y E. DAGNINO. *Política cultural y cultura política: una nueva mirada sobre los movimientos sociales latinoamericanos*, Colombia, Taurus, 2001.

GOFFMAN, ERVING. *Frame analysis*. Boston, Northeastern University Press, 1974.

GOFFMAN, ERVING. *Forms of talk*, Oxford, Basil Blackwell, 1981.

GÓMEZ, MARCELO. “La Conflictividad laboral durante el Plan de Convertibilidad en la Argentina (1990-1994). Las prácticas de lucha sindical en una etapa de reestructuración económica y desregulación del mercado de trabajo”, en *Revista Estudios Sociológicos* México, Colegio de México N° 45/97, 1997.

GÓMEZ, MARCELO. “Crisis del capitalismo, formas de conciencia y resurgir de la acción colectiva”, en *Revista Theomai*, Num. Especial, Invierno 2002.

GÓMEZ, MARCELO. “Origen y desarrollo de los repertorios de la acción colectiva reivindicativa 1994-2003”, en E. Villanueva y A. Massetti. *Movimientos Sociales y Acción Colectiva en la Argentina hoy*, Buenos Aires, Prometeo, 2007.

GÓMEZ, MARCELO. “La soja de la discordia” en *Revista Laboratorio* N°22, 2008, Versión electrónica en <http://laboratorio.fsoc.uba.ar>.

HALL, STUART “The rediscovery of ideology: Return of the repressed in Media Studies” en M. Gurevitch y ot. *Culture, Society and the Media*, N. York, Ed. Methuen, 1982, pp. 56-90.

HOPENHAYN, M. “¿Integrarse o subordinarse? Nuevas cruces entre política y cultura”, en D. Mato (Comp.). *Estudios Latinoamericanos sobre Cultura y Transformaciones Sociales en tiempos de globalización*, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso), 2001, versión electrónica en www.globalcult.org.ve/pub/Clacso1/hopenhayn.pdf.

HUNT, S.; R. BENFORD y D. SNOW. “Marcos de acción colectiva y campos de identidad en la construcción social de los Movimientos” en Aquiles Amparán op. Cit, 2006.

KEANE, J. “Transformaciones estructurales de la esfera pública”, en *Revista Estudios Sociológicos del Colegio de México*, xv, 1997, pp. 43, 47-77.

KLANDERMANS, BERT y SJOERD GOSLINGA. “Discurso de los medios, publicidad de los movimientos y la creación de marcos par la acción colectiva: ejercicios teóricos y empíricos sobre la construcción de significados”, en Doug McAdam; John McCarthy y Mayer Zald (edits.) *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*, Ed- istmo, Madrid, 1999.

LEÓN, O.; S. BURCH y E. TAMAYO. *Movimientos sociales y comunicación*, Quito, Agencia Latinoamericana de Información, 2005, Edición digital tomada en septiembre de 2006 de www.alainet.org/publica/movcom/mov_soc_com.pdf.

LARAÑA, ENRIQUE y JOSEPH GUSFIELD: *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*, Madrid, Ed. Centro de Investigaciones Sociológicas, 1994.

MARTÍN BARBERO, J. *De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía*, Barcelona, Gustavo Gilli s.a, 1987.

MARTÍN BARBERO, J. Transformaciones comunicativas y tecnológicas de lo público. *Lo público. Una pregunta desde la sociedad civil, Memorias del V Encuentro Iberoamericano del Tercer Sector*, Bogotá, 2000, (pp. 75-86).

MASSETTI, ASTOR y ERNESTO VILLANUEVA (comp.). *Los movimientos sociales en la Argentina de Hoy*, Buenos Aires, Prometeo, 2007.

MATA, M. C. *Comunicación y ciudadanía. Problemas teórico-políticos de su articulación*, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba, 2006.

MCCARTHY; JACKIE JOHN SMITH y MAYER ZALD. *El acceso a la agenda pública y a la agenda del gobierno: medios de comunicación y sistema electoral* en Doug McAdam, John McCarthy y Mayer Zald (eds) op. cit., 1999.

MCLEOD, DOUGLAS y BENJAMIN DETENBER. “Efectos de enmarcado de la cobertura noticiosa televisiva de la protesta social”, en *Journal of Communication*, Vol. 49 Issue 3, Summer 1999 (original en inglés).

MEES, L. “¿Vino viejo en odres nuevos? Continuidades y discontinuidades en la historia de los movimientos sociales”, en P. Ibarra y B. Tejerina (Eds.). *Los movimientos sociales: Transformaciones políticas y cambio cultural*, Madrid, Ed. Trotta, 1998, pp. 291-320.

MELUCCI, ALBERTO “Asumir un compromiso: identidad y movilización en los Movimientos Sociales”, en *Zona Abierta*, N° 69, Madrid, 1994.

REGUILLO, R. (2005). *Horizontes fragmentados. Comunicación, cultura, pospolítica. El (des) orden global y sus figuras*, México, Ed. Iteso, 2005.

RIECHMANN, JORGE y FRANCISCO FERNÁNDEZ REY. *Redes que dan Libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales*, Buenos Aires, Paidós, 1995.

ROSANVALLON, P. *La Contrademocracia. La política en la era de la desconfianza*, Buenos Aires, Ed. Manantial, 2007.

SCHIFFRIN, DEBORAH. “La narrativa como autorretrato: construcciones sociolingüísticas de la identidad”, en *Language in Society* N° 25 (original en inglés), 1996.

SCRIBANO, A. “La sociedad hecha callo: conflictividad, dolor social y regulación de las sensaciones”, en *Mapeando interiores. Cuerpo, conflicto y sensaciones*, Córdoba, Jorge Sarmiento (Edit.), 2007.

SNOW, D.; B. ROCHFORD, S. WORDEN y R. BENFORD. “Procesos de alineamiento de marcos, micromovilización y participación en movimientos”, en Aquiles Amparán. op. cit., 2006.

SNOW, D. y R. BENFORD. “Ideología, resonancia de marcos y movilización de los participantes”, en Aquiles Amparán. op. cit., 2006.

SNOW, D. y R. BENFORD. “Marcos Maestros y Ciclos de Protesta”, en Aquiles Amparán. op. cit., 2006.

SVAMPA, MARISTELLA. *La sociedad excluyente*, Buenos Aires, Ed. Tecnos, 2005.

TARROW, SIDNEY. *Poder en movimiento*, Madrid, Alianza, 1997.

TILLY, C. “Los movimientos sociales entran en el siglo veintiuno”, *Revista Política y Sociedad*, Vol. 42, Núm. 2, 2005 pp. 11-35. Edición digital www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO0505230011A.PDF.

MASTRINI, G. y M. BECERRA. *Periodistas y magnates. Estructura y concentración de las industrias culturales en A. Latina*, Buenos Aires, Prometeo, 2007.